DIRECTORA EJECUTIVA CEDHU

ASESOR JURIDICO CEDHU

ESCRITO DE SOLICITUDES ARGUMENTOS Y PRUEBAS QUE PRESENTA EL Dr. CESAR DUQUE, ASESOR JURÍDICO DE LA COMISION ECUMENICA DE DERECHOS HUMANOS (CEDHU) COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LAS VÍCTIMAS.

I LOS HECHOS

1. Según consta en el expediente tramitado ante los tribunales internos, el 16 de mayo de 1997, en la Ciudad de Manta, Provincia de Manabí, en horas de la madrugada, al frente de la entrada del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional (en adelante SECAP) se estacionó una camioneta blanca, por lo cual el señor Manuel Armijos, guardia de seguridad de dicha institución, se acercó a dicho vehículo para averiguar qué hacía en el lugar. Antes de que pudiera llegar a la camioneta, uno de los hombres que se encontraba en la camioneta se acercó a él y le manifestó que no se preocupara porque pertenecían a la "fuerza de inteligencia" y le mostró una credencial¹, por lo cual el guardia se retiró.

2. Alrededor de las 9:30 a.m., de ese mismo día, la víctima Marco Bienvenido Palma Mendoza, de 45 años, junto a su hijo Luis Miguel Palma Bravo de 11 años de edad, se movilizaba en su automóvil en la referida ciudad de Manta y cuando se encontraba a la altura del SECAP fue interceptado por una camioneta blanca doble cabina, vidrios

¹ ANEXO 1. - Entrevista a Manuel Armijos. Informe Policial No. 97-218-OID-MM-PREL de 23 de mayo de 1997, firmado por Lino Caicedo, investigador de la Policía Nacional, dirigido al Sub-Jefe de la Oficina de Investigación del Delito de la Policía de Manta.

polarizados, sin placas², de la cual se bajaron tres hombres vestidos de civil, fuertemente armados y cubiertos con pasamontañas.

3. Con posterioridad se conoció que quienes participaron en dicho secuestro formaban parte del equipo de seguridad del empresario manabita Medardo Cevallos³, los mismos que eran ex miembros de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE)⁴.

4. Uno de ellos sacó del auto a Luis Miguel Palma Bravo, hijo de Marco Palma Mendoza⁵, el cual corrió hasta la casa para contar a su madre lo sucedido, en tanto los otros hombres condujeron a Marco Palma al interior de la camioneta blanca y partieron con rumbo desconocido.

5. Ese mismo día, alrededor de las 10:00 horas, Lidia Guadalupe Bravo, compañera de Marco Palma, una vez que se enteró por su hijo, que Marco había sido secuestrado, junto con familiares, amigos y vecinos acudió a la policía y cárcel con la finalidad de buscar a su compañero, sin que haya logrado ubicarlo, motivo por el cual acudió a los medios de comunicación con cobertura local y provincial a fin de dar a conocer los hechos⁶.

6. El 17 de mayo de 1997, la señora Lidia Bravo acudió a la Función Judicial y presentó una denuncia por el secuestro de Marco Palma, denuncia que correspondió conocer al Juzgado Décimo Primero de lo Penal

² ANEXO 2. - Denuncia presentada por Lidia Guadalupe Bravo Bravo, compañera del señor Marco Palma Mendoza, ante el Juez de lo Penal de Manabí el 17 de mayo de 1997.

³ ANEXO 3. - Declaración de Lenin Ordóñez en Informe Policial No. 2000-128-PJ-M-COMPL de 26 de febrero de 2000, firmado por el Cabo primero de policía Aladino Zambrano, dirigido al Jefe de la Policía Judicial de Manta; ver además declaración rendida en la Policía Judicial de Quito en Informe Policial de 4 de marzo de 2000, firmado por el Subteniente Marco Zuñiga, dirigido al Jefe Provincial de la Policía Judicial de Pichincha.

⁴ ANEXO 4. - Testimonio Indagatorio de Freddy Simon Contreras Luna, rendida ante el Juez XI Penal de Manabí el 27 de marzo de 2000; testimonio de Vicente Aviles rendida ante el mismo juez el 4 de abril de 2011 y certificación conferida por el Jefe del Departamento Administrativo de la Dirección de Personal de la FAE.

⁵ ANEXO 5. - Testimonio instructivo de Luis Miguel Palma Bravo rendido ante el Juzgado Décimo Primero de lo Penal de Manabí del 5 de abril de 2000.

⁶ Denuncia presentada por Lidia Guadalupe Bravo Bravo, compañera de Marco Palma, anexo 2, supra nota 2.

de Manabí, en la cual solicitaba se iniciaran las investigaciones pertinentes, para lo cual debía oficiarse a la Oficina de Investigación del Delito de la Policía de Manta (en adelante O.I.D.) y a la FAE acantonada en Manta a fin de obtener información sobre los hechos denunciados y se recepte las declaraciones de personal del SECAP que observó la presencia de la camioneta blanca y la llegada de una camioneta color azul de la FAE con personal uniformado, los cuales informaron que el personal militar a través de señas y ademanes mantenían comunicación con aquellos que estaban al interior de la camioneta blanca.⁷

7. Ese mismo día, el Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí dispuso al Jefe de la O.I.D. de Manta que procediera a realizar una exhaustiva investigación de los hechos denunciados e informe a dicha judicatura los resultados que se obtengan⁸.

8. El 22 de mayo de 1997, Carlos Alberto Palma Mendoza, hermano de Marco Bienvenido Palma Mendoza, de conformidad con la Constitución vigente a la fecha de los hechos, presentó ante la Municipalidad de Manta un recurso de *habeas corpus*. Ante dicho recurso ese mismo día el Alcalde de Manta dirigió comunicación a varias autoridades como el Comandante del Ala de Combate No. 23 de la FAE, el Capitán del Puerto de Manta, el Jefe del Comando Policial de Manta, al Jefe de la O.I.D., al Juzgado Octavo de lo Penal de Manabí, al Juez de Tránsito, y a los Comisarios Nacionales, disponiendo que el señor Palma fuera conducido a su presencia y presentaran los justificativos que consideraran pertinentes⁹.

9. El 23 de mayo de 1997, la O.I.D. envió al Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí el informe preliminar de las investigaciones realizadas en torno al secuestro de Marco Palma, en el cual constan las versiones del hijo y compañera de Marco Palma, guardias de seguridad y

⁷ Denuncia presentada por Lidia Guadalupe Bravo Bravo, compañera de Marco Palma Mendoza, anexo 2, supra nota 2, Informe Policial No. 97-218-OID-MM-PREL de 23 de mayo de 1997, anexo 1, supra nota 1.

⁸ ANEXO 6.- Oficio N° 640-97 de 17 de mayo de 1997, suscrito por el Juez XI de lo Penal de Manabí y dirigido al Jefe de la Oficina de Investigación del Delito de Manta.

⁹ ANEXO 7.- Comunicación del 22 de mayo de 1997, firmada por el Alcalde de Manta, dentro del Recurso de Hábeas Corpus presentado por Carlos Alberto Palma Mendoza, dirigido a la Sub. Jefatura de la O.I.D. de Manta.

director del SECAP y se informa que a pesar de haberse requerido la presencia del personal de la FAE que estuvo en el lugar de los hechos, ellos nunca comparecieron a declarar¹⁰.

10. Dicho informe policial señala que momentos previos al secuestro había llegado a las instalaciones del SECAP un vehículo de la FAE con miembros de esa institución para gestionar la realización de dos cursos y, que “al momento que un conscripto esperaba en el vehículo se ha producido el secuestro”, por lo que se trataba de una coincidencia y no se había podido establecer vinculación alguna entre ese hecho y el secuestro, para lo cual se adjunta certificados de la FAE en torno a que Marco Palma no se encontraba detenido en dichas dependencias y que no existía en esa institución vehículo alguno con las características del utilizado para el secuestro.

11. Lidia Bravo había sido informada por su abogado que Marco Palma estaría detenido en instalaciones militares de la Ciudad de Quito, por lo cual se moviliza a dicha ciudad y el 30 de mayo de 1997, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (en adelante CEDHU) presentó un recurso de hábeas corpus ante la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito¹¹, dentro de cuyo trámite la Alcaldía señaló audiencia para el 6 de junio de 1997 y dispuso a diversas autoridades que esa fecha Marco Palma fuera conducido a su presencia, junto con la respectiva orden de privación de libertad, recurso que fue aceptado por el Alcalde disponiendo la libertad de Marco Palma, a pesar de lo cual no produjo ningún resultado para el esclarecimiento de su paradero.

12. El 1 de julio de 1997, el Juzgado Décimo Primero de lo Penal de Manabí avocó conocimiento de la denuncia presentada por la señora Lidia Guadalupe Bravo y, dictó auto de cabeza de proceso¹².

13. El abogado de Lidia Bravo insistía en que sus contactos le informaban que Marco Palma esta detenido en instalaciones militares,

¹⁰ Informe policial 97-218-OID-MM-PREL del 23 de mayo de 1997, anexo 1, supra nota 1.

¹¹ ANEXO 8. - Recurso de Habeas Corpus presentado en la Alcaldía de Quito a favor de Marco Palma.

¹² ANEXO 9. - Auto cabeza de Proceso dictado por el Juzgado XI de lo Penal de Manabí, instruyendo el sumario de ley.

por lo que el 21 de julio de 1997, la CEDHU presentó una denuncia sobre la supuesta participación de miembros de la Armada Nacional en la detención de Marco Palma, recibiendo del Jefe del Estado Mayor de la Armada el 8 de agosto de 1997 una comunicación en que se manifestaba que tras realizar una prolija investigación sobre la denuncia, se determina que ningún reparto ni personal naval perteneciente a esa institución tenían algo que ver con la detención de Marco Palma¹³.

14. La CEDHU también remitió una comunicación al Presidente de la República, informando sobre el secuestro de Marco Palma, recibiendo el 3 de octubre de 1997 una comunicación del Ministro de Gobierno y Policía, en que se manifestaba que el Ministerio de Defensa Nacional informaba que Marco Palma en ningún momento fue detenido por miembros de las Fuerzas Armadas¹⁴.

15. El 9 de junio de 1998, en la O.I.D. se elabora un parte policial que señala que se entrevistó al abogado Ignacio Reyes Cadenas y a Lidia Bravo, compañera de Marco Bienvenido Palma Mendoza, quienes indicaron que una amante del señor Lenin Ordóñez, conocida como Bélgica, le había comentado a una amiga que Marco Palma se encontraba muerto y que había sido asesinado por Lenin Ordóñez, quien trabajaba como miembro del equipo de seguridad de la compañía PECIA, la cual contaba con vehículos nuevos y equipos de seguridad sofisticados. El parte policial indica que el hijo del señor Palma había señalado que un mes antes de la desaparición de su padre, éste se había encontrado con el señor Lenin Ordoñez y había tenido una discusión con él¹⁵.

16. El 1 de septiembre de 1998, la Oficina de la O.I.D. elabora un informe que establece que no se había obtenido información que permitiera dar con el paradero de Marco Palma¹⁶.

¹³ ANEXO 10. - Oficio ESMAAR-SED-062-0 de 8 de agosto de 1997, dirigido a la Hna. Elsie Monge, Presidenta de CEDHU y firmado por el Jefe del Estado Mayor de la Armada.

¹⁴ ANEXO 11. - Oficio N° 0347 del Ministerio de Gobierno de 3 de octubre de 1997, dirigido a la Hermana Elsie Monge, Presidenta de la CEDHU.

¹⁵ Anexo 12. - Parte Elevado el 9 de junio de 1998, al Sr. Jefe de la O.I.D. de Manta por el Sargento segundo de Policía, Lino Caicedo Bonifacio.

¹⁶ ANEXO 13. - Informe Policial 98-190-OID-MM, suscrito por el Sargento segundo Lino Caicedo Bonifacio, dirigido al Jefe de la IID-Manta el 1 de septiembre de 1998.

17. Con base en la información brindada por el Abogado Ignacio Reyes Cárdenas, abogado de la compañera de Marco Palma, el 25 de enero de 1999, la CEDHU envió una comunicación al Ministro de Defensa Nacional, solicitando que iniciara una investigación respecto a la desaparición de Marco Palma y el posible involucramiento de las Fuerzas Armadas¹⁷.

18. El 17 de marzo de 1999, el Ministerio de Defensa Nacional comunicó a la CEDHU que no existía ninguna responsabilidad por parte del personal de inteligencia de la Fuerza Aérea ecuatoriana acantonada en la Base Aérea Eloy Alfaro de Manta y que existía la posibilidad de que la desaparición del señor Palma se hubiera realizado por motivos de venganza o chantaje, puesto que “dispone de una comodidad económica y por antecedentes de homicidio en su pasado”¹⁸.

19. Las autoridades de policía y el juez no realizan diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, hasta que dos años y nueve meses más tarde, el 16 de febrero de 2000 Lenin Ordóñez fue detenido en la Ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, se lo acusaba de robo en la empresa PECIA, de propiedad de la familia Cevallos¹⁹. Ordóñez durante su declaración dice que voluntariamente quiere declarar sobre otros hechos y relata lo sucedido con Marco Palma Mendoza²⁰.

20. En su declaración ante la policía, Lenin Ordóñez indicó que en el mes de mayo de 1997, cuando se desempeñaba como Jefe de Seguridad de las empresas de la familia Cevallos, delincuentes no identificados habían robado armas de fuego, computadoras, llantas y un fax en la empresa “Manabí Motors”, por lo que el Ingeniero Medardo Cevallos le había pedido que se hiciera cargo de la investigación ofreciéndole todo lo necesario para dicho trabajo, él señaló que reunió a Freddy Contreras, Vicente Domínguez y Jhonny Menéndez, quienes eran guardaespaldas de los ejecutivos de las empresas de la familia

¹⁷ ANEXO 14. - Oficio No. 034-CEDHU/99 de 25 de enero de 1999, firmado por Elsie Monge, presidenta de la CEDHU, dirigido al Ministro de Defensa Nacional.

¹⁸ ANEXO 15. - Oficio No. 990281-MJ-2-b de 17 de marzo de 1999, del Ministerio de Defensa Nacional, dirigido a la Hna. Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la CEDHU.

¹⁹ ANEXO 16. - Escrito de Lidia Bravo Bravo, dirigida al Juez XI Penal de Manabí el 24 de febrero del 2000, foja 19 del proceso interno; Informe Policial No. 2000-116-PJ-M de 21 de febrero de 2000, firmado por Aladino Acosta, investigador de la Policía Nacional, dirigido al Jefe de la Policía Judicial de Manta.

²⁰ Declaración de Lenin Ordóñez en Informe Policial No. 2000-128-PJ-M-COMPL de 26 de febrero de 2000, anexo 3, supra nota 3.

Cevallos, que realizaron varias investigaciones, las cuales arrojaron como responsables del robo a Marco Palma y otra persona conocida como "el Flaco". Señaló que una vez que secuestraron a Marco Palma el 16 de mayo de 1997, lo trasladaron a Manabí Motors para cambiar de vehículo y posteriormente lo condujeron a otra propiedad de la familia Cevallos donde estaba el otro secuestrado y confesó haber participado en el robo. Indicó que como Marco Palma les dijo que los objetos fueron entregados a los Figueroas y que nunca los iban a recuperar, se comunicó con los señores Medardo Cevallos y Ramón Bravo Mera, quienes ordenaron el traslado de las dos personas secuestradas hasta la empresa que la familia Cevallos tenía en Palestina Provincia del Guayas, que allí se haría cargo un general que es amigo de la familia.

21. Durante su declaración Lenin Ordóñez señaló que en la ruta a Palestina evadieron los controles policiales que encontraron en el camino presentando las credenciales que tenían de ex miembros de la FAE, señaló además que a los secuestrados los mantuvieron durante cinco días sin comer, a base de agua, y atados y que Freddy Contreras había matado a Marco Bienvenido Palma y a Jorge Jhon Mero Parrales (conocido como "el Flaco") porque se habían querido escapar. Indicó que posteriormente tiraron los cadáveres al río Norcay, siendo sus cuerpos encontrados por campesinos de la parroquia Jesús María, del cantón Naranjal, el 26 de mayo de 1997.

22. Esta declaración permite que en el año 2000, la policía retome las investigaciones y se trasladen a verificar la información en la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, lugar en el cual se entrevista a pobladores, a quien era la Teniente Político en aquella fecha, se trasladan al cementerio del lugar y se verifica la información que años atrás publicará el Diario El Universo²¹.

23. En efecto, Diario El Universo en su edición del 30 de mayo de 1997, había informado que hace una semana en las orillas del río Norcay, cerca de la parroquia Jesús María del Cantón Naranjal, Provincia del Guayas se habían encontrado dos cadáveres en avanzado estado de descomposición, a cuyo levantamiento había acudido la Teniente Político de dicha parroquia, que ordenó su traslado a la morgue para la autopsia de ley, luego de lo cual se enterró los cadáveres en el cementerio local, ya que ningún familiar los había

²¹ ANEXO 17. - Informe Suplementario de la Policía Nacional de Ecuador No. 2000-150-PJ-M-COMPL de 3 de marzo de 2000, fojas 62 a 76 del proceso penal interno.

reclamado. Se informa además que tenían un trapo en la cavidad bucal y estaban amordazados la boca, además de tener una tira de tela en el cuello²².

24. El 29 de febrero de 2000, el Señor Juez XI de lo Penal de Manabí ordenó la prisión preventiva de Lenin Oswaldo Ordóñez Ortiz, Vicente Domínguez, Freddy Contreras, Medardo Cevallos Gómez Piñan, Carlos Vite, Ramón Bravo Mera y Marcelino Gómez, además de disponer que la policía continúe con las investigaciones procediendo a trasladarse al Cantón Naranjal y exhumar los cadáveres a fin de practicarles el reconocimiento y autopsia de ley²³.

25. En cumplimiento de la disposición judicial, en base en las declaraciones de Lenin Ordóñez que fueron confirmadas por los pobladores de la Parroquia Jesús María en el Cantón Naranjal, Provincia del Guayas, la policía se traslada al cementerio del lugar y en presencia de los familiares se procede a la exhumación de los cadáveres de Marco Bienvenido Palma Mendoza y Jorge Jhon Mero Parrales, sus cuerpos son trasladados a Manta, Provincia de Manabí.²⁴

26. En Manta en presencia de los familiares el 29 de febrero de 2000 se realizó la diligencia de reconocimiento y autopsia respectiva²⁵

27. Dentro del proceso penal instaurado en el Juzgado XI de lo Penal de Manabí, para investigar el secuestro y muerte de Marco Palma, el 9 de marzo de 2000, rindió testimonio indagatorio Lenin Oswaldo Ordóñez Ortiz²⁶. El 13 de marzo de 2000, se realizó la diligencia de reconstrucción de los hechos²⁷.

²² ANEXO 18. - Recorte de prensa de diario *El Universo* de 23 de mayo de 1997

²³ ANEXO 19 Providencia del Juez XI Penal de Manabí ordenando prisión preventiva de los acusados y más diligencias a efectuar la policía.

²⁴ Informe Suplementario de la Policía Nacional No. 2000-150-PJ-M-COMPL de 3 de marzo de 2000, supra nota 20, anexo 16.

²⁵ ANEXO 20. - Acta de reconocimiento y autopsia de cadáver, realizado en Manta y firmado por el Juez XI de lo Penal de Manabí y los peritos Dr. Camilo B. Andrade Carrillo y Dr. Edwin G. Díaz Loor, perito, fojas 50 del proceso penal interno.

²⁶ ANEXO 21. - Testimonio indagatorio del sindicado Lenin Oswaldo Ordóñez Ortiz, rendido ante el Juez XI de lo Penal de Manabí, en Manta el 9 de marzo de 2000, fojas 86 a 90 del proceso penal interno, declaración en que reitera lo dicho ante los agentes de policía.

28. El 14 de marzo de 2000, Rosalía Mariuxi Palma Bravo, hija de Marco Bienvenido Palma Mendoza, acude al Juzgado XI Penal de Manabí y presenta acusación particular en contra de Medardo Cevallos Balda, Medardo Cevallos Gómez- Piñán, Alberto Cevallos Gómez-Piñán, David Cevallos Gómez-Piñán, Carlos Cevallos, Marcelino Gómez Ponce, Ramón Bravo Mera, Vicente Domínguez Avilez, Jhonny Menéndez, Carlos Cedeño Vite, Freddy Contreras y Lenin Ordóñez²⁸.

29. El 16 de marzo de 2000, Rosa Rufina Parrales, madre del occiso Jhon Mero Parrales, compareció ante el Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí y presentó acusación particular en contra de Medardo Cevallos Balda, Medardo Cevallos Gómez- Piñán, Alberto Cevallos Gómez-Piñán, David Cevallos Gómez-Piñán, Carlos Cevallos, Marcelino Gómez Ponce, Ramón Bravo Mera, Vicente Domínguez Avilez, Jhonny Menéndez, Carlos Cedeño Vite, Freddy Contreras y Lenin Ordóñez²⁹.

30. El 18 de marzo de 2000 el Juez XI Penal de Manabí acepta a trámite las acusaciones particulares y hace extensivo el proceso penal a Medardo Cevallos Balda, Alberto Cevallos Gómez-Piñán, David Cevallos Gómez-Piñán, Carlos Cevallos y los abogados Ignacio Buenaventura Reyes Cárdenas e Isabel Montaña de Mera.³⁰

31. El 21 de marzo de 2000 el Juzgado XI Penal de Manabí realiza el reconocimiento del lugar de los hechos en la puerta de entrada al SECAP en que fue secuestrado Marco Palma y luego se trasladan hasta la

²⁷ ANEXO 22. - Acta de reconstrucción de los hechos, realizada en Manta, el 13 de marzo de 2000 con la participación del Juez XI de lo Penal de Manabí, el Secretario del Juzgado y dos peritos, fojas 93 proceso interno.

²⁸ ANEXO 23. - Acusación particular interpuesta por Rosalía Palma Bravo en contra de los acusados y solicita al juez continúe con las investigaciones hasta que se llegue a la sanción de los responsables, fojas 109 a 115 del proceso penal interno.

²⁹ ANEXO 24. - Escrito de acusación particular interpuesta por Rosa Rufina Parrales, fojas 175 a 177 del proceso penal interno.

³⁰ ANEXO 25. - Providencia de 18 de marzo de 2000, emitida por el Juzgado XI Penal de Manabí, fojas 189 a 190 del proceso penal interno.

Ciudadela Pradera I y II hasta el lugar en que fue secuestrado Jhon Mero Parrales³¹.

32. El 16 de marzo de 2000, en la Ciudad de Guayaquil son detenidos Vicente Domínguez Avilez y Freddy Contreras, declarando ante la policía el detenido Vicente Domínguez que en mayo de 1997 junto a Lenín Ordóñez, Freddy Contreras y Jhonny Menéndez procedieron a detener a Marco Palma y Jhon Mero, por ser presuntos autores de un robo en las instalaciones de Manabí Motors de propiedad de la familia Cevallos y que el Ing. Medardo Cevallos Gómez-Piñan dio la orden de darles muerte, por lo que sus cuerpos los arrojaron a un río³².

33. El 23 de marzo de 2000 comparece a la judicatura la hija de Marco Palma, Mariuxi Palma a fin de rendir su testimonio instructivo en que relata lo ocurrido mencionando además como el abogado que contrataron engaño a su madre llevándola a varios recintos militares en diversas ciudades, diciendo que los de la FAE tienen a su padre, acudiendo incluso a la Comisión de los derechos humanos de Quito para que ayude a investigar que ocurrió con su padre³³.

34. En varias oportunidades las acusadoras particulares solicitaban al juez XI de lo Penal de Manabí se proceda a ordenar la prisión preventiva de los autores intelectuales de los hechos³⁴, contestando el juez que dicha medida cautelar es una facultad discrecional del juzgador, por lo cual no provee dichas peticiones.³⁵

35. Nelson José Palma Mendoza, hijo de Marco Palma comparece ante el Juez XI de lo Penal de Manabí y solicita que el hecho del secuestro y

³¹ ANEXO 26.- Acta de reconocimiento del lugar de los hechos, fojas 255 del proceso penal interno.

³² ANEXO 27.- Parte Informativo elevado al Jefe Provincial de la Policía Judicial del Guayas, firmado por el Capitán de Policía Marcelo González, fojas 292 del proceso penal.

³³ ANEXO 28.- Testimonio instructivo rendido por Mariuxi Palma Bravo ante el juez XI de lo Penal de Manabí, fojas 279 y 280 del proceso penal.

³⁴ ANEXO 29.- Solicitud a la judicatura que dicte medida cautelar de prisión preventiva contra los autores materiales.

³⁵ ANEXO 30.- Providencia del 24 de marzo de 2000 negando la petición de ordenarse la detención de los autores materiales.

asesinato de su padre no quede en la impunidad y se castigue tanto a los autores intelectuales como materiales³⁶.

36. Geoconda Palma Figueroa, Marco Palma Figueroa, Monserrate Palma Cedeño, Nelson José Palma Mendoza, y Vicente Palma Mendoza en representación de Robinson Palma Mendoza, en calidad de hijos de Marco Bienvenido Palma Mendoza, comparecen ante el Juez XI de lo Penal de Manabí y presentan acusación particular en contra de autores intelectuales y materiales, cómplices y encubridores del secuestro y posterior asesinato de su padre, solicitando a la judicatura se efectúe algunas diligencias³⁷

37. El 2 de mayo de 2000 comparece a la judicatura Pablo Antonio Palma Pico y relata que una vez enterado de la desaparición de su primo Marco Palma acompañó a Lidia Bravo en su búsqueda, contratación de abogado y otros lugares en los cuales el abogado les dijo que él se encontraba detenido, todo lo cual fue un engaño hasta enterarse de la verdad cuando Lenin Ordóñez fue detenido y confeso todo³⁸. Esa misma fecha comparece a la judicatura Lidia bravo Bravo y relata lo ocurrido con su compañero³⁹

38. El 2 de mayo de 2000, la señora Rosa Rufina Parrales, madre del occiso Jhon Mero Parrales, solicitó al Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí que en vista de que se había enterado "extraprocesalmente" que los señores Medardo Cevallos Balda, Medardo Cevallos Gómez- Piñán, Alberto Cevallos Gómez-Piñán, David Cevallos Gómez-Piñán, Carlos Cevallos, Marcelino Gómez Ponce, Ramón Bravo Mera, Vicente Domínguez Avilez, Jhonny Menéndez, Carlos Cedeño Vite y Freddy Contreras, no

³⁶ ANEXO 31. - Escrito presentado ante el Juez XI Penal de Manabí por Nelson José Palma Mendoza el 30 de marzo de 2000, señalando domicilio de su abogado para recibir notificaciones.

³⁷ ANEXO 32. - Escrito de acusación particular presentado ante el Juez XI Penal de Manabí por Geoconda Palma Figueroa, Marco Palma Figueroa, Monserrate Palma Cedeño, Nelson José Palma Mendoza, y Vicente Palma Mendoza en representación de Robinson Palma Mendoza, en calidad de hijos de Marco Bienvenido Palma Mendoza el 17 de abril de 2000, señalando domicilio de su abogado para recibir notificaciones.

³⁸ ANEXO 33. - Testimonio instructivo rendido el 2 de mayo de 2000 en el Juzgado XI Penal de Manabí.

³⁹ ANEXO 34. - Testimonio instructivo rendido el 2 de mayo de 2000 en el Juzgado XI Penal de Manabí.

habían tenido ninguna participación en la muerte de su hijo, Jhon Mero Parrales, desistía expresamente de la acusación particular que tenía planteada en contra de las anteriores personas, y de cualquier otra acción penal o civil en contra de las mismas⁴⁰. En el mismo escrito la señora Parrales indicó que sí seguiría impulsando su acusación particular en contra del principal responsable de la muerte de su hijo, esto es Lenin Ordóñez, como único responsable de la infracción acusada.

39. El 3 de mayo de 2000, familiares del occiso Jhon Mero Parrales firmaron ante un notario un acta de compromiso en el que manifiestan su adhesión al desistimiento realizado por la señora Rosa Rufina Parrales Cedeño de continuar con la acusación particular en contra de las anteriores personas y, su compromiso de no impulsar ninguna acción penal o civil en contra de las mismas⁴¹.

40. El 4 de mayo de 2000, la señora Rosalía Mariuxi Palma Bravo, hija de Marco Palma, desistió expresamente de la acusación particular que tenía planteada en contra de los señores Medardo Cevallos Balda, Medardo Cevallos Gómez-Piñán, David Cevallos Gómez-Piñán, Carlos Cevallos, Marcelino Gómez Ponce, Ramón Bravo Mera, Vicente Domínguez Avilés, Jhonny Menéndez, Carlos Cedeño Vite y Freddy Contreras y, de cualquier otra acción penal o civil en contra de las mismas⁴², señalando que continuará impulsando su acusación particular en contra de Lenin Ordóñez, como único responsable de la muerte de su padre.

41. El 5 de mayo de 2000, Lidia Guadalupe Bravo, compañera del señor Palma, suscribió un acto de compromiso en la Notaría Pública Cuarta del Cantón de Manta, en representación de los hijos menores y mayores del señor Palma en la que manifiestan su adhesión al desistimiento realizado por Rosalía Mariuxi Palma Bravo de continuar con la acusación

⁴⁰ ANEXO 35. - Escrito dirigido por la señora Rosa Rufina Parrales Cedeño al Juez XI de lo Penal de Manabí, en el proceso penal 319-97 por el delito contra las personas en contra de Lenin Ordóñez.

⁴¹ ANEXO 36. - Notaría Pública Cuarta del Cantón Manta, Testimonio de Escritura autorizado por el Notario Ab. Simón Zambrano Vences.

⁴² ANEXO 37. - Escrito dirigido al Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí por Rosalía Mariuxi Palma Bravo, dentro del proceso penal No. 319-97 en contra del Dr. Medardo Cevallos Balda, Ing. Medardo Cevallos Gómez Piñán, Lenin Ordóñez Ortiz.

particular en contra de las anteriores personas y, su compromiso de no impulsar ninguna acción penal o civil en contra de las mismas⁴³.

42. Ante tal hecho, el 9 de mayo de 2000, la señora Perfelita Matilde Mendoza Aguayo, madre de Marco Palma, presentó acusación particular en contra de Medardo Cevallos Balda, Alberto Cevallos Gómez-Piñán, Medardo Cevallos Gómez-Piñán, David Cevallos Gómez-Piñán, Ramón Bravo Mera, Carlos Cevallos y Marcelino Gómez Ponce como autores intelectuales de la muerte de su hijo y, en contra de Lenin Oswaldo Ordóñez Ortiz, Freddy Simón Contreras Luna, Stanley Vicente Domínguez Avilés, Johnny Menéndez y Carlos Vite, como autores materiales de la muerte de Marco Bienvenido Palma Mendoza⁴⁴.

43. El 9 de mayo del 2000, el Juez XI de lo Penal de Manabí revocó la prisión preventiva dictada en contra de los sindicados Medardo Cevallos Gómez-Piñán, Marcelino Gómez Ponce y Ramón Bravo Mera, con base en los anteriores desistimientos⁴⁵.

44. Ante tal circunstancia, el 12 de mayo de 2000, el Fiscal XI Penal de Manabí envió un escrito al Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí manifestando su inconformidad con la revocatoria del acto de prisión preventiva dictada el 9 de mayo de 2000, ya que para ello solamente había tenido en cuenta el desistimiento realizado por los familiares de los señores Palma y Jhon Mero Parrales y, recordando que el proceso debe realizarse con el impulso del Ministerio Público y de oficio por el propio juez⁴⁶.

45. El 18 de mayo de 2000, la señora Rosa Rufina Parrales, madre del occiso Jhon Mero Parrales, compareció ante el Juez Décimo Primero de lo

⁴³ ANEXO 38. - *Notaría Pública Cuarta del Canton Manta, Testimonio de Escritura autorizado por el Notario Ab. Simón Zambrano Vinces.*

⁴⁴ ANEXO 39. - *Escrito de Perfelita Matilde Mendoza Aguayo, dirigido al Señor Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí, dentro de la causa instaurada para investigar lo sucedido con Marco Palma.*

⁴⁵ ANEXO 40. - *Resolución del 9 de mayo de 2000, del Juzgado XI de lo Penal de Manabí, con asiento en la Ciudad de Manta.*

⁴⁶ ANEXO 41. - *Ministerio Fiscal General, Causa Penal No. 319-97, firmado por el Abogado George Moreira Mendoza, Fiscal XI Penal de Manabí.*

Penal de Manabí y desistió de la acusación particular contra Lenin Ordóñez⁴⁷

46. El 23 de mayo de 2000, se incorporaron al proceso las acusaciones particulares presentadas por la familia del señor Palma, por la familia de Jhon Mero Parrales y por parte de la madre de Marco Bienvenido Palma Mendoza, Perfilita Matilde Mendoza Aguayo, únicamente respecto de los sindicados Ignacio Reyes Cárdenas, Isabel Montaña de Mera y Lenin Oswaldo Ordóñez, “por cuanto de autos consta el reconocimiento de firmas y rúbricas del desistimiento otorgado a favor de los otros encausados”⁴⁸.

47. El 26 de mayo de 2000, la señora Perfilita Matilde Mendoza Aguayo solicitó al Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí, deje sin efecto la providencia dictada el 23 de mayo de 2000. Para solicitar aquello fundamenta la petición en el artículo 48 del CPP, señalando que únicamente el agraviado podía desistir de la acusación y, no los familiares de los agraviados⁴⁹. En el escrito, la señora Perfilita Matilde Mendoza ratificó su acusación en contra de los autores materiales e intelectuales de la muerte de su hijo.

48. El 23 de junio de 2000 la Corte Provincial de Justicia de Portoviejo considerando que conforme la ley existen indicios contra de Freddy Contreras y Vicente Domínguez Aviles, niega el amparo de libertad interpuesto por los detenidos⁵⁰.

49. El 21 de agosto de 2000 comparece al juzgado la señora Perfilita Matilde Mendoza Aguayo para rendir su declaración instructiva en que se ratifica en su acusación particular contra los autores intelectuales y materiales⁵¹.

⁴⁷ ANEXO 42. - Escrito dirigido por la señora Rosa Rufina Parrales Cedeño al Juez XI de lo Penal de Manabí.

⁴⁸ ANEXO 43. - Providencia de mayo 23 de 2000 suscrita por el Juez XI de lo Penal de Manabí. Proceso 319-97

⁴⁹ ANEXO 44. - Escrito dirigido al Señor Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí.

⁵⁰ ANEXO 45. - Resolución del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Manabí.

⁵¹ ANEXO 46. - Diligencia de declaración instructiva.

50. El 9 de noviembre de 2000 comparece al juzgado la señora Perfelita Matilde Mendoza Aguayo para en cumplimiento del Código Procesal Penal formalizar su acusación particular en contra de los acusados.⁵²

51. El Fiscal una vez cerrado el sumario emite dictamen en que acusa a Lenin Ordóñez Ortiz, Freddy Contreras Luna, Stanley Vicente Domínguez Aviles y se abstiene de acusar al resto de sindicatos.⁵³

52. El 22 de enero de 2001, el Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí dictó auto de apertura de la Etapa del Plenario en contra de Lenin Ordóñez Ortiz, Freddy Contreras Luna, Stanley Vicente Domínguez Aviles, Carlos Alfredo Cedeño Vite y Jonny Menéndez y, sobreseyó provisionalmente a los demás sindicatos⁵⁴.

53. Este auto interlocutorio es apelado por las partes procesales, apelación que corresponde conocer a la Cuarta Sala de la Corte Provincial de Justicia de Portoviejo que al resolver el 16 de febrero de 2001 confirma el auto de apertura al plenario en contra de Lenin Ordóñez Ortiz, Freddy Contreras Luna, Stanley Vicente Domínguez Aviles, lo revoca en cuanto a Carlos Alfredo Cedeño Vite y Jonny Menéndez en cuyo favor dicta auto de sobreseimiento provisional del proceso y de los sindicatos y confirma el sobreseimiento provisional del proceso dictado en favor de los sindicatos Medardo Cevallos Gómez-Piñan, Ramón Bravo Mera, Marcelino Gómez Ponce, David Cevallos Gómez Piñan, Medardo Cevallos Balda, , Alberto Cevallos Gómez-Piñan, Carlos Cevallos, Ignacio Reyes e Isabel Montaña⁵⁵

⁵² ANEXO 47. - Escrito de formalización de la acusación particular presentado al Juzgado XI Penal de Manabí.

⁵³ ANEXO 48. - Dictamen fiscal parcialmente acusatorio emitido por el abogado Jorge Moreira, Fiscal XI de lo Penal de Manabí, de fecha 26 de diciembre de 2000.

⁵⁴ ANEXO 49. - Auto de Apertura al Plenario, Juzgado XI Penal de Manabí, ee de enero de 2001

⁵⁵ ANEXO 50. - Resolución de Apelación emitida por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Manabí.

54. La etapa del plenario correspondió conocer al Tribunal Sexto de lo Penal de Manabí que al resolver dictó sentencia condenatoria contra Lenin Oswaldo Ordóñez Ortiz, Freddy Simón Contreras Luna y Stanley Vicente Domínguez Avíles, imponiéndoles la pena de 12 años de reclusión mayor extraordinaria⁵⁶.

55. De esta sentencia los condenados presentaron un recurso de casación, el cual fue declarado improcedente por la Segunda Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia el 26 de junio de 2002⁵⁷.

56. El Juzgado XI de lo Penal de Manabí el 16 de febrero de 2007 atendiendo las peticiones de quienes fueron sobreseídos provisionalmente y considerando que de conformidad con el Código Procesal Penal han transcurrido más de tres años desde aquella decisión judicial procede a dictar auto de sobreseimiento definitivo del proceso y de los sindicados Medardo Cevallos Gómez-Piñan, Ramón Bravo Mera, Marcelino Gómez Ponce, David Cevallos Gómez Piñan, Medardo Cevallos Balda, Alberto Cevallos Gómez-Piñan, Carlos Cevallos, Ignacio Reyes e Isabel Montañó, Carlos Alfredo Cedeño Vite y Jonny Menéndez.⁵⁸

57. Esta decisión judicial por disposición del Código Procesal Penal sube en consulta a la Primera Sala de la Corte Provincial de Justicia de Portoviejo que al resolver el 9 de abril de 2007 establece que desde el auto de sobreseimiento provisional emitido en el 2001 no consta que el proceso penal para ellos se haya reabierto, ni se han practicado otras pruebas en su contra, por lo cual habiendo transcurrido el plazo establecido en la ley, confirma en todas sus partes el auto de sobreseimiento definitivo, con lo cual los autores intelectuales del secuestro y posterior asesinato de Marco Palma quedaron en la impunidad⁵⁹, ya que dicha causa al momento se encuentra archivada⁶⁰.

⁵⁶ ANEXO 51. - Sentencia del Tribunal Penal de Manabí, Manta 19 de marzo de 2001, dentro de la Causa Penal N° 18-2001.

⁵⁷ ANEXO 52. - Sentencia de Casación, Segunda Sala Penal de la Corte Suprema

⁵⁸ ANEXO 53. - Auto de sobreseimiento definitivo emitido por el Juzgado 11 Penal de Manabí

⁵⁹ ANEXO 54. - Auto que confirma el sobreseimiento definitivo emitido por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Portoviejo.

⁶⁰ ANEXO 55. - Providencia del 16 de abril de 2007 emitida por el Juzgado XI Penal de Manabí.

II. ARGUMENTOS DE DERECHO

II.1. - Garantías Judiciales, artículo 8 de la Convención.

58. La Convención Americana prescribe en el artículo 8.1 que:

“8.1 toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley... para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.

59. Los familiares de las víctimas tienen el derecho a saber la verdad sobre lo que les ocurrió a sus parientes. Esto emana de la obligación del Estado de hacer uso de todos los medios que tiene a su disposición para llevar a cabo una investigación seria sobre las violaciones cometidas dentro de su jurisdicción a efectos de identificar a los responsables⁶¹, dentro de un proceso justo conforme lo señala la Convención, recurso que debe ser efectivo pues constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención.⁶²

60. En el caso bajo examen está demostrado que el 17 de mayo de 1997 Lidia Bravo acudió al Juzgado XI de lo Penal de Manabí y presentó formal denuncia sobre el secuestro de Marco Palma Mendoza, ante lo cual el juez ordenó a la policía proceda a investigar los hechos.

61. La policía en cumplimiento a la decisión judicial se limitó a receptor declaraciones de la denunciante, guardias del SECAP que pudieron observar la presencia del vehículo en que se cometió el secuestro, al director de dicha institución del Estado y a una señora

⁶¹ véase Corte I.D.H., Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 166

⁶² Corte. I.D.H., Caso Castillo Petruzi, sentencia de 30 de mayo de 1999, párr. 184.

que tenía un kiosko de ventas, sin que haya receptado declaraciones al personal militar de la FAE que durante el secuestro estuvo en el SECAP.

62. La indagación al personal militar de la FAE era fundamental, por cuanto a su llegada al SECAP estaba cerca de la entrada estacionado el vehículo en que se secuestró a Marco Palma. En ese sentido Lenin Ordóñez en su declaración ante la policía⁶³ y luego ante el juez⁶⁴ dice que el 16 de mayo de 1997 mientras esperaban a Marco Palma cerca de la entrada al SECAP, llegó el vehículo de la FAE. Entonces dichos militares pudieron otorgar información importante que hubiese permitido la identificación de los responsables que anteriormente pertenecían a la misma institución armada. Recordemos que Lidia Bravo en su denuncia ante el juez manifiesta que la gente que vio el secuestro le informó que los de la FAE se hicieron señas con los de la camioneta blanca, es decir ellos se conocían y una verdadera investigación a dicho personal hubiese permitido rescatar con vida a Marco Palma y detener a los responsables.

63. Pero ello no aconteció, el informe policial del 23 de mayo de 1997 es muy claro en establecer que a pesar de haber solicitado la comparecencia del personal militar para que rinda versiones, ello no ocurrió⁶⁵.

64. Recién a los 15 días de presentada la denuncia el Juez XI Penal de Manabí dicta auto cabeza de proceso e instruye sumario de ley a fin de investigar judicialmente los hechos⁶⁶.

65. Es en febrero de 2000 en que se detiene a Lenin Ordóñez por acusación de robo a sus anteriores patronos, que él declara sobre lo ocurrido con Marco Palma, otorgando detalles de los hechos que permite saber que por cinco días se los mantuvo con vida, se les dio solo pan y agua hasta que se los asesinó en la Provincia del Guayas y su cuerpo

⁶³ Ver declaración de Lenin Ordóñez en Informe Policial No. 2000-128-PJ-M-COMPL de 26 de febrero de 2000, anexo 3, supra nota 3.

⁶⁴ Ver testimonio indagatorio del sindicado Lenin Oswaldo Ordóñez Ortiz, rendido ante el Juez XI de lo Penal de Manabí, en Manta el 9 de marzo de 2000, anexo 21, supra nota 26.

⁶⁵ Ver anexo 1, supra nota 1.

⁶⁶ Ver anexo 9, supra nota 12.

fue arrojado en un río de la Parroquia Jesús María en el Cantón Naranjal.

66. Es recién con esta declaración obtenida, no en base a la investigación estatal para descubrir que ocurrió con Marco Palma, sino de manera fortuita a través de una declaración voluntaria de una persona detenida por motivos distintos, que se llega a saber que Palma fue asesinado, se menciona a los autores materiales de tal acto que fueron sentenciados penalmente e incluso se identifica a los autores intelectuales que quedaron en la impunidad debido a que a su favor se dictó auto de sobreseimiento definitivo.

67. Esta declaración permite establecer que el secuestro y posterior asesinato de Marco Palma y Jhon Mero Parrales, fue un acto bien planificado por personas que tenían formación en inteligencia militar, por haber sido varios años miembros de la FAE, que utilizaron credenciales otorgadas por el Estado para evitar que el guardia del SECAP realice alguna acción que frustre el secuestro que iban a desarrollar, credenciales que igualmente las utilizaron para evadir controles policiales cuando movilizaban en un furgón hacia el Guayas a las dos personas secuestradas y que el secuestro ocurrió a la entrada de una institución estatal como el SECAP y frente a personal militar de la FAE que llegó a dicha institución a solicitar cursos de formación según dicen las Fuerzas Armadas.

68. El Estado no hizo nada para en realidad esclarecer los hechos, a pesar de que en 1998 tuvo noticia de que una señora de nombre Bélgica, amante de Lenin Ordóñez, había contado que Marco Palma fue asesinado por dicha persona⁶⁷.

69. Cuando su cuerpo apareció flotando a las orillas de un río, en la Parroquia Jesús María del Cantón Naranjal en la Provincia del Guayas, los agentes del Estado no hicieron nada tendiente a identificar el cadáver e iniciar una investigación para determinar las circunstancias de su muerte, tan solo se limitaron a enterrarlo en una fosa común del cementerio local, argumentando que ningún familiar se había acercado a reclamar sus restos⁶⁸.

⁶⁷ Ver parte policial elevado el 9 de junio de 1998, al Sr. Jefe de la O.I.D. de Manta por el Sargento segundo de Policía, Lino Caicedo Bonifacio, Anexo 12, supra nota 15.

⁶⁸ Recorte de prensa de diario El Universo de 23 de mayo de 1997, anexo 18, supra nota 22.

70. Si las autoridades judiciales o la policía hubiesen investigado sobre las circunstancias de la muerte de las personas que aparecieron flotando en un río a fines de mayo de 1997 o si hubiesen investigado respecto a la información que consta en el parte policial del 9 de junio de 1998, el proceso penal hubiese avanzado con mayor celeridad a fin de sancionar a los responsables, sin embargo ello no ocurrió, las autoridades estatales se cruzaron de brazos y esperaron sentadas hasta que les llegue la información respecto a los hechos, por lo que se puede afirmar que la conducta de las autoridades judiciales fue deficiente al no realizar una investigación efectiva.

71. Si en este caso se sentenció a tres personas por el secuestro y muerte de Marco Palma, no es por un trabajo de investigación iniciado por el Estado en cumplimiento a sus obligaciones internacionales, sino que ello se debe a la confesión voluntaria realizada por Lenin Ordóñez, que fue detenido por motivos ajenos con el presente caso.

72. Para el Estado fue creíble la versión de Lenin Ordóñez, solo en cuanto a los autores materiales a los cuales les impuso penas condenatorias, pero no fue creíble su versión en torno a los autores intelectuales a los cuales los sobreyó definitivamente una vez que se presentaron escritos de desistimiento por parte de los familiares de las víctimas, olvidándose que se trata de un delito de acción pública que no necesita del impulso particular para investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables.

73. La falta de acusación fiscal y la decisión de sobreseimiento se basa en el hecho de que en el proceso penal no consta evidencia de la responsabilidad de los acusados como autores intelectuales del secuestro y posterior asesinato de Marco Palma, aquella evidencia no tenían que aportarla los familiares de la víctima, sino que el Estado al ser un delito de acción pública debía actuar de oficio a fin de allegar al proceso penal toda la evidencia que demuestre o no su responsabilidad en los hechos acusados, en ese sentido es de recordar que el agente policial a cargo de la investigación señala que no se ha logrado establecer la responsabilidad de los autores intelectuales debido a que ellos no están detenidos, es decir que para los agentes del Estado, es indispensable que hayan personas detenidas para esclarecer los hechos, de lo cual surge que un delito que no tenga detenidos simplemente queda en la impunidad.

74. Esta forma de actuar ocurrida en el presente caso en que no se determinó la responsabilidad de los autores intelectuales debido a que ellos no estaban detenidos, ocurre actualmente en que la mayoría de crímenes quedan en la impunidad tal como lo establece el profesor Philip Alston, Relator Sobre Ejecuciones Extrajudiciales, en su informe sobre Ecuador emitido en mayo del año en curso.

75. Las acusadoras particulares en varias oportunidades solicitaron se proceda a emitir auto de prisión preventiva en contra de los autores intelectuales, a lo cual el juez se negaba diciendo que dicha medida cautelar era facultativa del juzgador y que él creía que no era necesario, será que ello, aunado a la falta de una verdadera investigación que establezca su responsabilidad a fin de que haya el oportuno sobreseimiento dictado a los autores intelectuales se debía a que ellos gozaban no solo de poder económico en el lugar, sino que además de poder político, pues durante el desarrollo del proceso penal el Gobierno nacional designó a Medardo Cevallos como embajador en México⁶⁹, .

76. El quemeimportismo de las autoridades para investigar y sancionar los hechos permitió que el proceso penal en total dure cerca de 10 años, desde que se presentó la denuncia en el juzgado XI Penal de Manabí, hasta que el 9 de abril de 2007 la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo considerando que desde el 2001 en que se emitió el auto de sobreseimiento provisional hasta la fecha no se ha reabierto el sumario ni practicado nueva prueba tendiente a la incriminación de los sindicatos, emitió auto de sobreseimiento definitivo a favor de los autores intelectuales⁷⁰.

77. La Comisión Interamericana ha establecido que las víctimas y sus familiares tienen derecho a una investigación judicial realizada por un tribunal penal designado para establecer y sancionar la responsabilidad

⁶⁹ ANEXO 56.- *Notas de solidaridad al embajador frente a las acusaciones vertidas en su contra.*

⁷⁰ *Ver el auto emitido el 9 de abril de 2007 por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Portoviejo que confirma el sobreseimiento definitivo emitido por el Juzgado XI Penal de Manabí, anexo 54, supra nota 59 y la providencia de archivo del proceso penal emitido por el referido juzgado el 16 de abril de 1997 una vez que recibió el ejecutorial superior, anexo 55, supra nota 60.*

respecto a las violaciones a los derechos humanos⁷¹, la duración del proceso judicial de casi 10 años, evidentemente constituye una violación a que la causa se resuelva dentro de un plazo razonable, además de que el asunto no implicaba mayor complejidad debido a que a los pocos días del secuestro apareció el cadáver de Marco Palma, que si se procedía a su identificación oportuna permitía primero que la familia sepa que ocurrió realmente con él y segundo permitía agilizar el proceso, además se realizaron pocas acciones estatales tendientes al descubrimiento de la verdad.

78. El proceso penal a parte de informes policiales que se limitan a receptar declaraciones a los familiares de las víctimas, con excepción del informe policial que relata el proceso de exhumación de los cadáveres, esta lleno de certificados de honorabilidad, certificados de no tener causas penales y declaraciones de personas que señalan la buen conducta de los acusados, en torno a investigar los hechos se observa que las autoridades policiales y militares se limitan a librar escritos pidiendo informen si esta detenido Marco Palma y se limitan a recibir respuestas de diversas unidades diciendo que no esta detenido, sin que se haya realizado una verdadera investigación tendiente a demostrar plenamente que no estan involucrados agentes estatales, quedando dudas sobre su participación o no en el secuestro y posterior muerte.

79. A los dos años y ocho meses de su secuestro, se tuvo conocimiento que Marco Palma estuvo con vida por cinco días y se lo mantuvo a pan y agua a fin de ablandarlos y no representen peligro para sus captores, sin que el Estado haya desplegado algún tipo de diligencia para intentar ubicar su paradero a pesar de que desde el 16 de mayo tuvo conocimiento de los hechos, por la información aparecida en la prensa y desde el 17 de mayo tuvo conocimiento la judicatura a través de la denuncia formal que presentó Lidia Bravo ante el Juez XI Penal de Manabí.

80. Cuando existen violaciones del derecho a la vida, la Corte ha dicho que debe emprenderse en forma inmediata a una investigación judicial en forma independiente e imparcial⁷² y cuando el Estado no investiga en forma exhaustiva e imparcial los hechos privativos a la

⁷¹ véase, en general, los informes números 28/92 (Argentina) y 29/92 (Uruguay), Informe Anual 1992-93 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

⁷² Corte I.D.H. Caso Myrna Mack Chang, sentencia del 25 de noviembre del 2003, párr. 157.

vida significa además otra violación al derecho internacional de los derechos humanos: la ruptura de la obligación de prevenir, evitar y combatir la impunidad. En este sentido la Corte Interamericana ha recordado que, bajo la Convención, "el Estado tiene el deber [jurídico] de evitar y combatir la impunidad"⁷³. Igualmente, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recordado que la impunidad de las violaciones de los derechos humanos constituye una violación a las obligaciones del Estado bajo el *Pacto*.

81. Como lo ha dicho la Corte, a diferencia del derecho penal interno, en los procesos sobre violaciones de derechos humanos, la defensa del Estado no puede descansar sobre la imposibilidad del demandante de allegar pruebas que, en muchos casos, no pueden obtenerse sin la cooperación del Estado, pues es el Estado quien tiene el control de los medios para aclarar hechos ocurridos dentro de su territorio⁷⁴. La razón de que se exija una serie de procedimientos en el caso de muerte no aclarada de una persona es ofrecer garantías a la familia y a la sociedad de que dicha muerte no va a permanecer inexplicada.

82. Ello por cuanto el Estado ejerce el monopolio de la acción penal, incluso en aquellos sistemas en que esta prevista la participación de la víctima o sus familiares, su ejercicio no es obligatorio sino optativo para el damnificado y no sustituye a la actividad estatal⁷⁵. Ya que, tratándose de delitos de acción pública que son perseguibles de oficio, aún cuando el afectado no se presentare como parte cuando le es permitido, el Estado tiene la obligación de investigar y perseguir esos delitos y nos los familiares, a fin de preservar el orden público y garantizar el derecho a la justicia. En su calidad de titular de la acción punitiva, el Estado, a través del Ministerio Público, tiene la

⁷³ Corte I.D.H., *Caso Nicolas Blake, Sentencia de Reparación de 22 de enero de 1999, Serie C; Resoluciones y Sentencias, párrafo 64.*

⁷⁴ Corte I.D.H., *Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, Serie C No 4, párrs. 135-136; Caso Godínez Cruz, Sentencia del 20 de enero de 1989, Serie C No 5, párrs. 141-142; Caso Gangaram Panday, Sentencia del 21 de enero de 1994, Serie C No. 16, párr. 49 y; Caso Neira Alegría y Otros, Sentencia del 19 de enero de 1995, Serie C No. 20, párr. 65.*

⁷⁵ CIDH, *Informe Anual 1997, informe N° 52/97, Caso 11.218 (Arges Sequeira Mangas), Nicaragua, OEA/Ser.L/V/II.98 Doc.6 Rev., 13 de abril de 1998, párs. 96 y 97, pág. 735*

obligación indelegable e irrenunciable de actuar o promover la acción penal e impulsar las distintas etapas procesales hasta su conclusión⁷⁶.

83. En el presente caso, el Estado se olvidó de su obligación de promover la investigación judicial a fin de que en un plazo razonable se identifique y sancione tanto a los autores materiales como intelectuales, aún cuando los responsables sean agentes privados.

84. En ese sentido la H. Corte Interamericana dijo que la responsabilidad internacional del Estado puede derivarse también de actos cometidos por terceros o particulares en principio no atribuibles al Estado, cuando el Estado incumple su obligación de hacer respetar las normas de la Convención Americana y de asegurar la efectividad de los derechos allí consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona., aún en las relaciones inter-individuales, ya que la responsabilidad al Estado por actos de particulares puede darse cuando por acción u omisión de sus agentes se incumplan las obligaciones *erga omnes* contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana.

85. En este sentido, las obligaciones establecidas en la Convención Americana, y específicamente en esta disposición, “no se cumplen únicamente con no violar los derechos y libertades proclamados en ellos (deber de respeto), sino que comprenden también una obligación de garantía.

86. La Comisión ha dicho también que es obligación del Estado el proceder a una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial de todos los casos en que hayan quejas de parientes u otros informes fiables que hagan pensar que se produjo una muerte no debida a causas naturales en las circunstancias referidas⁷⁷.

⁷⁶ En relación a este punto véase, por ejemplo, Informe N° 12/95 Caso 11218, Nicaragua, OEA/L/II.90. Doc. 16, 13 septiembre 1995, párr. 7.19; Informe Anual de la CIDH (1996), OEA/Ser.L/V/II.95, Doc. 7 rev., 14 de marzo de 1997. Informe N° 36/96, Caso 10.843 (Chile), 15 de octubre de 1996. Con respecto a la necesaria acuciosidad que debe demostrar el Ministerio Público en el ejercicio del impulso procesal Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríguez, Sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 79

⁷⁷ Ver, CIDH Informe N° 10/95, Caso 10.580, Ecuador, Informe Anual de la CIDH, 1995, párrs. 32-34; Informe N° 55/97, caso 11.137, Argentina, 18 de noviembre de 1997, párrs. 413 a 424. En éstos casos, la Comisión ha adoptado como guía los “Principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias”, adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas: en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989.. Con el propósito de

87. Tanto a nivel universal como regional, los instrumentos internacionales sobre derechos humanos establecen los principios básicos que deben regir a la administración de justicia. Estas nociones parten de una premisa esencial, como es el deber de los Estados de proteger y garantizar a todas las personas, sin discriminación alguna, los derechos humanos⁷⁸. Para una protección y garantía eficaz se hace necesario, obviamente, la existencia de normas que protejan esos derechos, de recursos y mecanismos idóneos para hacerlos efectivos y de un sistema judicial que actúe consecuentemente y dentro de un plazo razonable, pues una demora injustificada puede constituir denegación de justicia al permitir la impunidad de los autores intelectuales del secuestro y posterior asesinato de Marco Palma y Jhon Mero Parrales.

88. El deber de investigación es una de aquellas obligaciones llamadas de medio y constituye uno de los pilares principales de la protección efectiva de los derechos humanos, ello significa que tal deber de investigación absuelve al Estado desplegando motu proprio las actividades necesarias para esclarecer los hechos y las circunstancias que los rodearon. Los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias fijan los criterios para el cumplimiento del deber de investigación y prescriben la necesidad de una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial, el relator sobre ejecuciones extrajudiciales ha reiterado que el incumplimiento de tales principios constituye un indicio de responsabilidad gubernamental, aunque no se pueda probar que en las ejecuciones de que se trate han estado directamente implicados los funcionarios gubernamentales⁷⁹.

complementar los principios relativos a una eficaz prevención e investigación de las ejecuciones extralegales/arbitrarias o sumarias y a fin de garantizar la realización de una investigación exhaustiva e imparcial Naciones Unidas aprobó el Manual para la Prevención Efectiva y la investigación de ejecuciones extra-judiciales, arbitrarias y sumarias y, en especial, el Protocolo Modelo para una investigación de las ejecuciones extra-judiciales, arbitrarias y sumarias ("Protocolo de Minnesota") Ver, 22 Naciones Unidas, documento ST/CSDHA/12.

⁷⁸ Ver p. ej. el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

⁷⁹ ver Informe a la Comisión de Derechos Humanos, documentos de NNUU, E/CN.4/1991/36, párr. 9591 y E7CN.4/1990/22, párr. 463.

89. La falta de diligencia, mostrada en el caso por el Estado, llegó al obstruccionismo para proteger a los responsables, pues cuando se encontró los cadáveres no se realizó ninguna investigación tendiente a identificar el cuerpo mediante la toma de huellas dactilares u otros medios, no se determinó la causa de su muerte y, no se preparó un informe detallando todas las observaciones del lugar, tan solo se ordenó enterrar los cadáveres en un afosa común, argumentando que ningún familiar los había reclamado.

90. El incumplimiento del Estado no sólo constituye por sí mismo una violación de sus obligaciones internacionales, sino que evidencia su falta de voluntad y mala fe en el cumplimiento de los principios básicos y fundamentales de la sociedad y del derecho internacional (*pacta sunt servanda* y *bona fide*), pues como ha señalado la Corte, los Estados no pueden por razones de orden interno dejar de asumir la responsabilidad internacional ya establecida⁸⁰.

91. La Convención establece que toda persona tiene la facultad de recurrir ante los órganos jurisdiccionales del Estado, para obtener la protección de sus derechos o para hacer valer cualquier otra pretensión. De esta manera se asegura la tranquilidad social, en tanto cuentan con una instancia y un proceso, previamente determinados por la ley, por medio del cual pueden resolver sus controversias.

92. Es decir que todas las personas tienen el derecho de acceder al sistema judicial, para que los órganos llamados a resolver su pretensión la estudien y dentro de un plazo razonable emitan una resolución motivada conforme a derecho. En ese sentido la H. Corte ha reconocido el derecho de las víctimas y de sus familiares a acceder a la jurisdicción competente a fin de que se investiguen los actos que lesionaron tales derechos, se determinen las responsabilidades del caso y se establezcan las reparaciones correspondientes.

93. En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha afirmado que se debe permitir a las víctimas de violaciones de derechos humanos descubrir la verdad respecto a los hechos cometidos, conocer sus autores, y obtener una indemnización apropiada. Por su parte, la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías ha dicho que el derecho a la justicia impone

⁸⁰ *Responsabilidad internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la Convención (arts. 1 y 2 Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-14/94 del 9 de diciembre de 1994. Serie A No. 14, párr. 35.*

a los Estados las obligaciones de investigar las violaciones, perseguir a sus autores y, si se establece su culpabilidad, hacer que sean sancionados.

94. En el caso bajo examen no se podía exigir a las víctimas que efectúen las acciones judiciales internas en busca de una sanción a los responsables, por cuanto ellas fueron asesinadas, por ello el derecho de acceso a la jurisdicción lo han ejercido sus familiares. Al respecto debemos recordar que la Comisión ha señalado que cuando como en este caso la víctima no está en condiciones de buscar una reparación judicial, el derecho a acudir a ese medio se transfiere necesariamente a los familiares de la víctima, al sostener que las víctimas y/o sus parientes tienen derecho a una investigación judicial a cargo de una corte de lo penal destinada a establecer y sancionar responsabilidades en casos de violaciones de derechos humanos⁸¹.

95. Por su lado la H. Corte ha manifestado que esto emana de la obligación del Estado de "investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación"⁸². Ha señalado además que, del artículo 8 de la Convención se desprende que las víctimas de las violaciones de los derechos humanos, o sus familiares, deben contar con amplias posibilidades de ser oídos y actuar en los respectivos procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los hechos y del castigo de los responsables, como en busca de una debida reparación".⁸³ ya que "el derecho a la verdad se encuentra subsumido en el derecho de la víctima o sus familiares a obtener de los órganos competentes del Estado el esclarecimiento de los hechos violatorios y las responsabilidades correspondientes, a través

⁸¹ Véase, en general, *Informes Nos. 28/92 (Argentina) y 29/92 (Uruguay) en Informe Anual de la CIDH 1992-93, OEA/Ser.L/V/II.83, doc. 14 corr. 1, 12 de marzo de 1993, págs. 51-53, 169-74; Alfonso Eugenio Da Silva vs. Brasil, Informe N. - 9/00 párr. 40.*

⁸² *Corte IDH, Caso Velásquez Rodríguez (Fondo), supra, párrafo 174.*

⁸³ *Ver Corte I.D.H., Caso Villagrán Morales y otros, sentencia de 19 de noviembre de 1999, párr. 227; Caso Blake, sentencia de 24 de enero de 1998, párrs. 96 y 97, y Caso Durand y Ugarte, sentencia de 16 de agosto del 2000, párrafo 129.*

de la investigación y el juzgamiento que previenen los artículos 8 y 25 de la Convención”⁸⁴,

96. La impunidad se da cuando los autores materiales, intelectuales o cómplices de conductas constitutivas de violaciones de los derechos humanos se sustraen a las consecuencias jurídicas de su actuación. Hay impunidad normativa cuando un texto legal exime de pena a los criminales. Hay impunidad fáctica cuando, a pesar de la existencia de leyes adoptadas para sancionar a los culpables, éstos se liberan de sanción adecuada ya por fallas en el funcionamiento del poder judicial, ya gracias a la amenaza o a la comisión de nuevos hechos de violencia,⁸⁵ ya porque una sentencia que impone una sanción no se cumple, resultando entonces la falta de sanción penal de alguien que efectivamente delinquiró.⁸⁶

97. Naciones Unidas, entiende por impunidad “la inexistencia, de hecho o de derecho, de responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones de los derechos humanos, así como de responsabilidad civil, administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas”⁸⁷.

98. La impunidad “constituye una infracción de las obligaciones que tienen los Estados de investigar las violaciones, adoptar medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia, para que sean procesados, juzgados y condenados a penas apropiadas, de garantizar a las víctimas recursos eficaces y la reparación del perjuicio sufrido y de tomar todas las medidas necesarias para evitar la repetición de dichas violaciones”⁸⁸

⁸⁴ ver Corte I.D.H., *Caso Barrios Altos*, sentencia del 14 de marzo del 2001, párrafos 42 y 48.

⁸⁵ AMBOS, Kay, *Impunidad y derecho penal internacional*, Fundación Konrad Adenauer y otros, Santafé de Bogotá, 1997, pp. 30-31.

⁸⁶ REYES ECHANDÍA, Alfonso, *Criminología*, Bogotá, 1991, p. 24.

⁸⁷ *Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1., Definiciones, A.

⁸⁸ *Conjunto de Principios para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad*. Principio 20.

99. Es necesario que los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación sean efectivamente reconocidos, protegidos y garantizados por las autoridades nacionales. Si esos tres bienes jurídicos, salen maltrechos por cualquier razón con dificultad podrá afirmarse que el Estado este respetando y garantizando a toda la población la plena vigencia de los derechos garantizados en la Convención ya que ni en nombre de la seguridad pública ni en nombre de la democracia es legítimo desprestigiar los derechos de las víctimas, por cuanto el Estado no está autorizado a creer que la verdad, la justicia y la reparación son cosas que puede discrecionalmente otorgar o negar.

100. Es injusto tolerar que las violaciones a los derechos humanos queden impunes, por ello la impunidad debe ser vista, al mismo tiempo, como fuente y como resultado de la injusticia. No hay justicia allí donde aquellos que han ultrajado la dignidad humana con actos violentos y reprochables pueden jactarse de haber eludido la potestad estatal de imponer sanciones adecuadas.

101. La H. Corte ha precisado que, bajo la Convención Americana los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos, ello por cuanto el Estado está en el deber jurídico de investigar seriamente con los medios a su alcance las violaciones a los derechos humanos que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables y de imponerles las sanciones pertinentes⁸⁹.

102. En tanto el Comité de DDHH, de manera reiterativa, ha recordado la obligación que tienen los Estados de investigar a fondo las presuntas violaciones del derecho a la vida, y de encausar penalmente, juzgar y castigar a quienes sean considerados responsables de esas violaciones. Este deber es aplicable a fortiori en los casos en que los autores de esas violaciones han sido identificados⁹⁰.

⁸⁹ Corte IDH, Sentencia de 29 de julio de 1988, caso Velázquez Rodríguez, en Serie C: Resoluciones y Sentencias, N° 4, párrs. 166 y 174.

⁹⁰ Decisión sobre el caso de Nydia Erika Bautista de Arrellana, de 13 de noviembre de 1995, párr. 8 (6); Documento de las Naciones Unidas, CCPR/C/55/563/1993.

103. Además, la Convención establece en el artículo 8 que la familia de las víctimas tienen derecho a ser oídos por un tribunal competente a fin de esclarecer los hechos y buscar la sanción a los responsables dentro de un plazo razonable⁹¹, desde que el Estado ha demorado el trámite del proceso sin razones valederas que justifiquen tal demora excesiva, se establece la responsabilidad del Estado por negar a los familiares el acceso a dichas garantías.

104. El Estado no puede justificar que el proceso sustanciado en en el presente caso haya tardado casi 10 años hasta que en el 2007 se emitió una decisión definitiva por parte de la Primera Sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo al emitir el sobreseimiento definitivo a favor de quienes fueron nombrados como autores intelectuales por parte del acusado Lenin Ordóñez.

105. En efecto Ecuador cuenta dentro de su legislación con plazos claros para resolver las diversas etapas procesales así la etapa del sumario no debía durar más de 60 días en el caso demoró más de tres años, contados desde el 1 de julio de 1997 en que se dictó auto cabeza de proceso e instruyó el sumario de ley⁹² hasta diciembre del 2000 en que se declara cerrado el sumario⁹³. La etapa de apelación que no debía demorar más de 15 días se tardó 20 días en que la Cuarta sala de la Corte Superior de Justicia de Portoviejo, confirmó en una parte el auto del juez aquo y en otra lo revocó al sobreseer provisionalmente a otros dos acusados⁹⁴. La etapa del plenario tardó 26 días hasta el 129 de marzo de 2001 en que se dictó sentencia de primer nivel⁹⁵. La etapa de casación que no debía durar más de unos 60 días tardó unos 120 días hasta que el 26 de julio de 2002 la Segunda Sala Penal del supremo resolvió el recurso interpuesto por los sentenciados⁹⁶ y el 9 de abril

⁹¹ Corte I.D.H., *Caso de los Niños de la Calle*, sentencia de 19 de noviembre de 1999, párr. 227.

⁹² Ver anexo 9, supra nota 12.

⁹³ Ver anexo 48, supra nota 53

⁹⁴ Desde el 22 de enero en que se dicta auto de llamamiento a plenario hasta el 16 de febrero del mismo año en que se emite la resolución de apelación, anexo 49, supra nota 54 y anexo 50, supra nota 55.

⁹⁵ Ver anexo 51, supra nota 56

⁹⁶ Ver anexo 52, supra nota 57

de 2007 se resuelve definitivamente la causa al confirmarse el sobreseimiento definitivo de la causa⁹⁷ y procederse a su archivo⁹⁸.

106. Es decir que el proceso seguido por los hechos acaecidos contra Marco Palma Mendoza que debió demorar un promedio de 180 días conforme los plazos señalados en la ley, en la práctica demoró 9 años y 9 meses en ser resuelto, desde el 1 de julio de 1997 hasta el 9 de abril de 2007, lo cual evidentemente viola el derecho de la familia a que la causa sea decidida dentro de un plazo razonable conforme lo establece el artículo 8.1 de la Convención.

107. En este sentido la H. Corte Interamericana dijo que la demora de 50 meses constituye un plazo irrazonable para resolver una situación jurídica. En el caso bajo examen los dos procesos judiciales demoraron más de 65 meses, lo cual evidentemente viola el artículo 8.1 de la Convención⁹⁹.

108. Es regla general que una investigación penal debe realizarse lo más pronto posible a fin de proteger los intereses de las víctimas, preservar la prueba y salvaguardar los derechos de toda persona que en el contexto de la investigación sea considerada sospechosa, deber del estado que es fundamental cuando se está al frente de un hecho que le ha costado la vida a una persona.

109. Por lo expuesto claramente se establece que el Estado fue incapaz de otorgar a los familiares de las víctimas un recurso judicial que dentro de un plazo razonable investigue, identifique y sancione a todos los responsables del secuestro y posterior asesinato de marco palma Mendoza.

II.2 Protección judicial.- Artículo 25 de la Convención Americana.

110. El artículo 25 de la Convención dispone:

⁹⁷ Ver anexo 54, *supra* nota 59

⁹⁸ Ver anexo 55, *supra* nota 60

⁹⁹ Corte IDH, *Caso Suarez Rosero Vs. Ecuador*, sentencia emitida en noviembre de 1997, párrafo 73

1. *Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.*

2. *Los Estados partes se comprometen:*

a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

111. La primera información con la cual contaba la familia era que miembros de la FAE habían procedido a la detención de Marco Palma, versiones del guardia del SECAP al cual los ocupantes de la camioneta blanca, doble cabina, en que secuestraron a Marco Palma, le dijeron que no se preocupe que son de la Fuerza de Inteligencia y le mostraron unas credenciales, lo cual se corrobora con la versión de Lenin Ordóñez que informa que cuando llevaban a Marco Palma y Jhon Mero Parrales a Palestina, con la finalidad de evadir los controles policiales presentaban las credenciales que les otorgó el Estado, además el abogado de la familia en varias oportunidades les informó que sus averiguaciones determinan que él fue detenido por elementos de las Fuerzas Armadas y se encuentra en instalaciones militares.

112. Con base en esa primera información la familia primero interpuso un recurso de hábeas corpus ante el Alcalde de la Ciudad de Manta y cuando el abogado les informó que Marco Palma había sido trasladado a instalaciones militares en la ciudad de Quito, la CEDHU interpuso recurso de hábeas corpus ante el Alcalde de la Ciudad de Quito.

Recursos que debieron servir para que de forma inmediata el Estado se movilizara a fin de dar con el paradero de Marco Palma y asegurar el respeto a su derecho a la vida.

113. El recurso de hábeas corpus de conformidad con el artículo 28 de la Constitución vigente en aquella época establecía que:

“Toda persona que creyere estar ilegalmente privada de su libertad podrá acogerse al Hábeas Corpus. Este derecho lo ejercerá por sí o por interpuesta persona, sin necesidad de mandato escrito, ante el Alcalde bajo cuya jurisdicción se encontrare o ante quien hiciere sus veces. La autoridad municipal ordenará inmediatamente que el recurrente sea conducido a su presencia y se exhiba la orden de privación de la libertad. Su mandato será obedecido sin observación ni excusa por los encargados del centro de rehabilitación social o lugar de detención.

Instruido de los antecedentes, el Alcalde dispondrá la inmediata libertad del reclamante, si el detenido no fuere presentado o si no se exhibiere la orden, o si ésta no cumpliera los requisitos legales, o si se hubieren cometido vicios de procedimiento o, en fin, si se hubiere justificado el fundamento del recurso (...).”

114. Conforme consta del expediente, el Alcalde de Manta se limitó a solicitar a distintas dependencias del Estado (Comandante del Ala de Combate No. 23, Capitán del Puerto de Manta, Jefe del Comando Policial de Manta, Jefe de la O.I.D. de Manta, Juez Octavo de lo Penal de Manabí, Juez de Tránsito y Comisarios Nacionales) que el señor Palma fuera conducido a su presencia, sin que el recurso surtiera resultado alguno. Igualmente, el Alcalde de Quito únicamente dispuso a distintas autoridades que el señor Palma fuera conducido a su presencia el 6 de junio de 1997, sin que se generara resultado alguno.

115. Además frente al secuestro de una persona y su posterior asesinato el recurso efectivo para identificar a los responsables, enjuiciarlos y sancionarlos, es el proceso penal, según lo señala la legislación penal ecuatoriana.

116. Sin embargo el Gobierno de Ecuador no cumplió con su obligación de proporcionar un recurso sencillo, rápido y eficiente a la familia de las víctimas. Se olvidó el Estado que los familiares de las víctimas

tienen el derecho a saber la verdad sobre lo que les ocurrió. Esto emana de la obligación del Estado de hacer uso de todos los medios que tiene a su disposición para llevar a cabo una investigación seria sobre las violaciones cometidas dentro de su jurisdicción a efectos de identificar a los responsables¹⁰⁰, dentro de un proceso justo conforme lo señala la Convención, recurso que debe ser efectivo pues constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una sociedad democrática en el sentido de la Convención.¹⁰¹

117. Ha dicho también que el Estado tiene el deber de iniciar *ex officio* y sin dilación, una investigación seria, imparcial y efectiva, que no se emprenda como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Esta investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los hechos.

118. La Comisión ha establecido que las víctimas y sus familiares tienen derecho a una investigación judicial realizada por un tribunal penal designado para establecer y sancionar la responsabilidad respecto a las violaciones a los derechos humanos¹⁰².

119. En el caso bajo examen está demostrado que el 1 de julio de 1997 el Juzgado XI Penal de Manabí, dictó auto cabeza de proceso e instruyó sumario de ley a fin de identificar y sancionar a los responsables del secuestro y posterior asesinato de Marco Palma, sin embargo dicha judicatura durante el lapso de más de 2 años y ocho meses no desplegó mayores esfuerzos tendientes a descubrir lo ocurrido con Marco Palma y menos identificar a los responsables a fin de imponerles penas adecuadas, pues durante este lapso tan solo se receptaron versiones de los familiares de la víctima, del personal del SECAP y de una señora que tenía un kiosko al frente de dicha institución estatal..

¹⁰⁰ véase Corte I.D.H., *Caso Velásquez Rodríguez*. Sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 166

¹⁰¹ Corte. I.D.H., *Caso Castillo Petruzi*, sentencia de 30 de mayo de 1999, párr. 184.

¹⁰² véase, en general, los informes números 28/92 (Argentina) y 29/92 (Uruguay), Informe Anual 1992-93 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

120. Es la declaración de una persona detenida en febrero de 2000 por causas ajenas al presente caso, que permite que él voluntariamente decida contar que participó en el secuestro y muerte de Marco Palma y otra persona, y señale los nombres de las otras personas que participaron en los hechos ya sea en calidad de autores materiales y autores intelectuales y señale detalladamente como ocurrieron los hechos hasta su asesinato luego de cinco días del secuestro, lo que reactiva a las agencias estatales y permite a la policía exhumar los cadáveres que habían sido enterrados en una fosa común y proceder a su identificación y autopsia de ley para luego entregarlos a los familiares a fin de que procedan a sepultarlos en el lugar que ellos elijan.

121. En este sentido la Corte estableció que la negligencia de las autoridades judiciales encargadas de examinar las circunstancias de una violación de derechos humanos mediante la recolección oportuna de pruebas *in situ*, no puede ser subsanada con las tardías diligencias probatorias para buscar y exhumar restos mortales¹⁰³

122. Posterior a ello el desarrollo del proceso penal se limita a la toma de versiones de los acusados y de familiares de las víctimas y al acopio de certificados de antecedentes penales y de buena conducta de los acusados y la recepción de declaraciones acerca de la honorabilidad de los acusados que realizan varias personas, sin que el Estado haya desplegado mayores acciones, especialmente dirigidas a identificar y establecer las responsabilidades de los autores intelectuales, e incluso a desvanecer fehacientemente acerca de la responsabilidad de instituciones militares en el hecho, pues en ese sentido se limitó a certificar que Marco Palma no estaba detenido en recintos militares, sin desplegar mayores acciones tendientes a demostrar que sus agentes no estaban implicados en los hechos acusados, más allá de que la víctima haya estado detenida en instalaciones militares.

123. El artículo 25 de la Convención obliga a los Estados a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violación de los derechos humanos (art. 25), recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados, de

¹⁰³ Corte I.D.H., *Caso de la Masacre de Pueblo Bello*, Sentencia de 31 de enero de 2006, párr. 178.

garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción”¹⁰⁴.

124. En el caso bajo examen podemos afirmar que el recurso penal no fue efectivo, pues a pesar de que en el ámbito judicial se emitió una sentencia condenatoria en contra de los autores materiales del secuestro y posterior asesinato de Marco Palma y otra persona, no procedió a la identificación y sanción de los autores material de tan horrendo crimen que fue debidamente planificado con miras a que no se lo descubra y sus autores queden en la impunidad.

125. Podemos afirmar también que el recurso de hábeas corpus no fue efectivo, pues los acaldes que tenían competencia para sustanciarlo de conformidad con la legislación vigente tan solo se limitaron a dirigir comunicados a instancias estatales pidiendo que dicha persona sea trasladada a su presencia, sin que hayan desplegado acciones tendientes a su ubicación, por lo cual dichos recursos a la final resultaron ser ineficaces para dar con el paradero de Marco Palma y prevenir su asesinato.

126. Debe entenderse la efectividad del recurso no solo en cuanto a que haya un proceso judicial que permita la participación de la víctima o su familia, sino que dicho recurso es efectivo cuando se resuelve dentro de un plazo razonable y no cuando se tarda en exceso permitiendo que haya de facto denegación de justicia .

127. En ese sentido la Corte ha dicho que “la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una trasgresión de la misma por parte del Estado en el cual semejante situación tenga lugar (...) para que tal recurso exista, no basta con que este previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea formalmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla, un recurso que resulta ilusorio debido a las condiciones generales predominantes en el país, o incluso en las circunstancias particulares de un caso determinado, no puede ser considerado eficaz. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por

¹⁰⁴ Corte I.D.H., *Caso Velásquez Rodríguez, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, párr. 90; Caso Fairén Garbí y Solís Corrales, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, párr. 90 y Caso Godínez Cruz, Excepciones Preliminares, Sentencia del 26 de junio de 1987, párr. 92.*

la práctica, porque falten los medios para ejecutar sus decisiones; por cualquier otra situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión; o, por cualquier causa, no se permita al presunto lesionado el acceso al recurso judicial” ¹⁰⁵

128. La demora en resolver el proceso penal y la falta de despacho de los habeas corpus permiten concluir que el Estado de hecho carece de recursos rápidos y sencillos o efectivos que amparen a los individuos contra violaciones a las garantías constitucionales o de la Convención. Proceso penal que se prolongó por caso 10 años, definitivamente no responde a los requisitos establecidos por la Convención. Por ello pese a existir dentro del régimen jurídico normas que pretenden garantizar cualquier derecho individual que hubiera sido violado, en la práctica no funciona permitiendo que esto suceda.

129. Por lo expuesto claramente se establece que el Estado incumplió con su obligación de otorgar a los familiares de la víctima un recurso adecuado y sencillo para la determinación de la responsabilidad de los autores de tan graves hechos en forma oportuna y que ha sido incapaz de hacer cumplir la sentencia judicial emitida por la Corte Suprema, constituyendo aquello una infracción al artículo 25 de la Convención.

II.3. Derecho a la integridad personal (artículo 5 y 1(1) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos)

130. El derecho a la integridad personal, consagrado en el artículo 5(1) de la Convención Americana, establece que:

“toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral.

131. La falta de investigación oportuna respecto a de la desaparición de Marco Bienvenido Palma Mendoza durante tres años generó en sus familiares un profundo sentimiento de angustia e incertidumbre, hasta que por una situación no provocada por la actividad del Estado se determinó que él fue asesinado a los cinco días de su secuestro, y que los actores serían personas civiles .

¹⁰⁵ Ver *Garantías judiciales en Estados de Emergencia Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987, pár. 24.*

132. En efecto conforme consta del expediente, cerca de tres años los familiares del Marco Palma mantuvieron la esperanza de que éste se encontrara todavía con vida, situación que recién cambió en el 2000 con la exhumación e identificación de su cuerpo en un cementerio de la Parroquia Jesús María del cantón naranjal en la Provincia del Guayas.

133. La falta de investigación oportuna por parte del Estado a fin de descubrir las causas del secuestro, identificar a sus responsables y someterlos oportunamente a proceso judicial tendiente a su sanción penal expuso a la familia a una situación de angustia y desesperación, no solo por el hecho de la desaparición de su pariente, sino porque se vieron obligados a incurrir en gastos económicos en la contratación de abogados y la movilización a distintos lugares en la búsqueda de su pariente, les dejó sin dinero, lo cual necesariamente los llevó a cambiar su modo de vida, puesto que Lidia Bravo Bravo con la finalidad de continuar en la búsqueda de su conviviente y alimentar a sus hijos se vio forzada primero a vender sus dos vehículos y luego a deshacerse de sus muebles y electrodomésticos, lo cual aumentó el daño moral que ya de por sí la familia tenía con la desaparición de Marco Palma, lo cual incluso afectó sus relaciones sociales.

134. El secuestro y desaparición de una persona, constituye una evidente utilización de una técnica destinada a producir no sólo la desaparición misma, sino también un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor, no solo en la víctima si no también en sus familiares.

135. La Convención Americana claramente establece que toda persona tiene derecho a vivir en condiciones de dignidad, debiendo el Estado proteger este derecho, lo cual evidentemente en el presente caso no lo hizo, en ese sentido la H. Corte Interamericana ha establecido que los familiares de las víctimas de violaciones de los derechos humanos pueden ser, a su vez, víctimas¹⁰⁶. De esta forma es entendible que en casos que involucran el secuestro y la desaparición y posterior muerte de personas, la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de los familiares de la víctima es una consecuencia directa que les causa un severo sufrimiento por el hecho mismo del secuestro que se acrecienta por la constante negativa de las autoridades estatales de realizar una investigación eficaz para lograr el esclarecimiento de lo

¹⁰⁶ Corte IDH, *Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña*, Sentencia de 1 de septiembre de 2010, párr. 126, y *Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia)*, Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párr. 235.

sucedido¹⁰⁷, lo que hace presumir un daño a la integridad psíquica y moral de familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos¹⁰⁸, a causa de las actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos¹⁰⁹.

136. De tal suerte que resulta evidente la violación del derecho a la integridad personal de la familia de Marco Bienvenido Palma Mendoza, no solo por las consecuencias sufridas ante los hechos del caso, sino también por su búsqueda de justicia.

137. Por lo expuesto, solicitamos a la H. Corte declare que el Estado ecuatoriano violó el artículo 5(1) de la Convención en perjuicio de los familiares directos de Marco Palma Mendoza..

II.4.- La obligación de respeto y garantía.- Artículo 1 de la Convención Americana

138. El artículo 1 de la Convención establece que :

“1. Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social” .

139. El derecho internacional de los derechos humanos impone dos grandes órdenes de obligaciones a los Estados; el primero, un deber de

¹⁰⁷ Corte IDH, Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, *Ibidem*, párr. 126, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), *ibidem*, párr. 241.

¹⁰⁸ Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros, Sentencia de 27 de noviembre de 2008, párr. 119; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña, *Ibidem*, párr. 127, y Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia), *Ibidem*, párr. 235.

¹⁰⁹ Corte I.D.H. Caso Manuel Cepeda Vargas, Sentencia de 26 de mayo de 2010, párr. 195.

abstención de conculcar los derechos humanos y el segundo un deber de garantía de éstos.

140. El primero esta integrado por aquel conjunto de obligaciones que tienen que ver con el deber de abstención del Estado de violar -por acción u omisión- los derechos humanos, éste deber de respetar los derechos y libertades reconocidos en la Convención, implica que el ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los derechos humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia, superiores al poder del Estado. Así, en la protección de los derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal¹¹⁰.

141. Mientras que el segundo se refiere a las obligaciones del Estado como garante de los derechos de los individuos, que se materializa con la investigación, sanción y reparación de las violaciones de derechos humanos por los daños causados. Con ésta obligación debe "garantizar" el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su jurisdicción. Esto implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos¹¹¹. Esta obligación no se agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

142. Como consecuencia de esta obligación el Estado esta asimismo obligado a, adoptar todas las medidas necesarias para prevenir las violaciones, investigar las violaciones a los derechos¹¹², castigar a los

¹¹⁰ *Al respecto ver, la expresión "leyes" en el artículo 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986. Serie A No. 6, párr. 21.*

¹¹¹ *Corte I.D.H.. Caso Velásquez Rodríguez. Sentencia de 29 de Julio de 1988. Serie C No. 4, párr. 166; Caso Godínez Cruz, Sentencia de 20 de enero de 1989. Serie C No. 5, párr. 175, ver además Opinión Consultiva OC 11/90, 10 de agosto de 1990*

¹¹² *El deber de investigar, ha sido interpretado por la Corte Interamericana como una medida de protección de las personas. Véase Caso Vog (Guatemala), Medidas*

responsables, remediar la violación a través de la restitución íntegra a la situación anterior, si ella no es posible, indemnizar pecuniariamente y adoptar todas aquellas otras medidas de reparación adecuadas a fin de remediar la violación causada.¹¹³

143. El Estado entonces se coloca en una posición jurídica de garante de los derechos humanos, de la cual emergen obligaciones esenciales para la protección y garantía de éstos. Es sobre esta base que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado el concepto de deber de garantía, como noción nuclear de la posición jurídica del Estado en materia de derechos humanos. El Estado es por tanto, garante del pleno goce de los derechos de los individuos y, consecuentemente, debe cumplir con sus obligaciones internacionales, tanto convencionales como consuetudinarias.

144. El deber de garantía puede sintetizarse como el conjunto de “obligaciones de garantizar o proteger los derechos humanos y consiste en su deber de prevenir las conductas antijurídicas y si éstas se producen, de investigarlas, de juzgar y sancionar a los culpables y de indemnizar a la víctimas¹¹⁴. Este deber de garantía esta expresamente mencionado en varios tratados internacionales de derechos humanos, toda vez que éstos como la señalado la Corte Interamericana, “están orientados, más que a establecer un equilibrio de intereses entre Estados, a garantizar el goce de derechos y libertades del ser humano”¹¹⁵.

145. Las obligaciones que integran el deber de garantía son de naturaleza complementaria y no son alternativas ni sustitutivas. En este orden de ideas, el Relator de Ejecuciones Extrajudiciales ha considerado que “en virtud del derecho internacional los gobiernos estan obligados a investigar en forma exhaustiva e imparcial toda

provisionales. Caso Saquic Serech (Guatemala). Medidas provisionales. Caso Giraldo (Colombia). Medidas provisionales.

¹¹³ *Un ejemplo de como la Comisión recepta estos principios del derecho internacional es el caso Lissardi y Rossi vs. Guatemala decidido por la CIDH en su informe anual de 1994; pág. 55.*

¹¹⁴ *Informe de ONUSAL del 19 de febrero de 1992, documento de NNUU, A/46/876 S/23580, párr. 28.*

¹¹⁵ *Opinión Consultiva OC-1/82 de 24 de septiembre de 1982, párr. 24.*

denuncia de violación del derecho a la vida para identificar, someter a la justicia y castigar a los autores, obtener reparación a las víctimas o sus familiares y adoptar medidas eficaces para evitar que dichas violaciones se repitan en el futuro. Los dos componentes de ésta cuádruple obligación son en si mismo los elementos disuasorios más eficaces para impedir las violaciones de derechos humanos (...)”¹¹⁶.

146. Las obligaciones que integran el deber de garantía, son interdependientes. Así, la obligación de procesar y castigar a los responsables de violaciones de derechos humanos está en estrecha relación con la de investigar los hechos. No obstante no es posible que el Estado elija cual de éstas obligaciones habrá de cumplir. Si éstas pueden ser cumplidas separadamente una de otra, el Estado no deja de estar obligado a cumplir todas y cada una de ellas.

147. Del expediente surge que el 16 de mayo de 1997 Marco Palma fue secuestrado por una camioneta blanca a la entrada de la institución estatal SECAP, cuyos integrantes se identificaron ante el guardia de dicha institución como pertenecientes a la fuerza de inteligencia y le mostraron unas credenciales otorgadas por el Estado y que el Estado a pesar de que fue informado en forma inmediata de dicho acto no hizo nada para proteger a las víctimas evitando su posterior asesinato, a pesar de que inició un proceso judicial para investigar los hechos, no realizó acciones en forma diligente a fin de evitar su muerte, limitándose a receptar versiones, sin desarrollo procesal por casi tres años, hasta que circunstancialmente una persona detenida por otros motivos relató lo que realmente sucedió con Marco Palma, permitiendo la recuperación de los cadáveres y su posterior entrega a la familia y la sanción a los autores materiales, pero la grave deficiencia en la investigación judicial permitió la impunidad de los autores intelectuales de dichos delitos, dentro de un largo proceso penal que culminó definitivamente en el 2007 con la decisión de sobreseimiento definitivo a los autores materiales y el posterior archivo de la causa, lo cual determina que el Estado no ha cumplido con todas las obligaciones que le impone el deber de garantía conforme el artículo 1.1 de la Convención.

¹¹⁶ *ver informe a la Comisión de Derechos Humanos del Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o arbitrarias de la ONU, doc. E/CN.4/1994/7, párr. 688.*

148. La Jurisprudencia de la H. Corte, sostiene además que el Estado tiene la obligación de investigar toda situación que entrañe una violación de los derechos humanos consagrados en la Convención. Si el aparato estatal actúa en forma tal que la violación no es castigada y no se restablece con prontitud el pleno goce de esos derechos de la víctima, no ha cumplido con su obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de esos derechos a las personas que están bajo su jurisdicción¹¹⁷.

149. Ha señalado, que lo decisivo es dilucidar si una violación a los derechos humanos reconocidos por la Convención ha tenido lugar con el apoyo o tolerancia del Estado o si éste ha actuado de manera que la transgresión se haya cumplido en defecto de toda prevención o impunemente. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si la violación a los derechos humanos resulta de la inobservancia por parte de un Estado de sus deberes de respetar y garantizar dichos derechos, que le impone el artículo 1.¹¹⁸

150. Recordemos que según la declaración de quien participó en su secuestro y posterior muerte, Marco Palma Mendoza y Jhon Mero Parrales permanecieron con vida durante cinco días en una instalación perteneciente a la familia Cevallos Balda, hasta que se decidió su traslado a la Provincia del guayas, siendo asesinados en el Cantón Naranjal, sin que se haya hecho nada por protegerlos a pesar de que su familia comunicó a las autoridades en forma inmediata de lo ocurrido, lo que demuestra que el Estado no actuó de manera diligente para prevenir la muerte de estas personas.

151. A ello necesariamente se suma la deficiencia judicial en la investigación y demora incurrida en el trámite del proceso, lo cual permitió que muchas evidencias desaparezcan y de facto queden en la impunidad los autores intelectuales de los hechos.

152. La Corte dijo que el artículo 1.1 es fundamental para determinar si una violación de los derechos humanos reconocidos por la Convención

¹¹⁷ Corte I.D.H. Caso Velásquez Rodríguez, sentencia del 29 de julio de 1988, párrafo 176, ver también CIDH, Informe N° 50/99, CASO 11.739, 13 de abril de 1999, párrafo 39.

¹¹⁸ Corte I.D.H. Caso Velásquez Rodríguez, sentencia de 29 de julio de 1988, párr. 173; Caso Godínez Cruz, sentencia de 20 de enero de 1989, párr. 183; Caso Gangaram Panday, sentencia de 21 de enero de 1994, párr. 62.

puede ser atribuida a un Estado Parte, ya que dicho artículo pone a cargo de los Estados los deberes fundamentales de respeto y garantía, de tal modo que todo menoscabo a los derechos humanos que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública, constituye un hecho imputable al Estado que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la misma Convención¹¹⁹.

153. La Corte Interamericana dijo que la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente de su jerarquía, que violen la Convención Americana. Es decir, todo acto u omisión, imputable al Estado, en violación de las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, compromete la responsabilidad internacional del Estado¹²⁰.

154. En el presente caso, de las constancias que obran en el expediente, esta demostrado que agentes estatales no investigaron en forma oportuna los hechos a fin de prevenir la muerte de Marco Palma, al igual que no actuaron en forma diligente en el desarrollo del proceso penal, permitiendo que tarde en resolverse la causa, todo ello en perjuicio de la familia que buscaba justicia., lo que demuestra que el Estado violó su obligación de respeto y garantía establecido en el artículo 1.1 de la Convención, por lo cual solicitamos que esta responsabilidad sea declarada por la H. Corte.

III. REPARACIONES Y COSTAS

III.1.- Los derechos de las víctimas

155. En el ordenamiento internacional son víctimas las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia

¹¹⁹ Corte I.D.H., Caso "Cinco Pensionistas", Sentencia de 28 de Febrero de 2003, párr. 163; Baena Ricardo y otros. Sentencia de 2 de febrero de 2001, párr. 178; y Caso Caballero Delgado y Santana. Sentencia de 8 de diciembre de 1995, párr. 56.

¹²⁰ Corte I.D.H., Caso "La Ultima Tentación de Cristo" (Olmedo Bustos y otros), Sentencia de 5 de febrero de 2001. párr. 72

de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder y comprende además, en su caso, a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa.¹²¹

156. El derecho internacional reconoce a las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos tres derechos fundamentales, a saber: 1º El derecho a saber o derecho a la verdad, 2º El derecho a la justicia y 3º El derecho a obtener reparación¹²².

157. La H. Corte ha establecido que es un principio de derecho internacional que toda violación que haya causado un daño comporta la obligación de reparar a cargo del Estado¹²³.

158. De su lado, el Comité de Derechos Humanos considera que el deber de reparar el daño no se satisface solamente por medio del ofrecimiento de una cantidad de dinero a las víctimas. En primer término debe ponerse fin al estado de incertidumbre en que se encuentra la víctima¹²⁴.

159. Cabe añadir que en los instrumentos internacionales las formas de reparación son complementarias y no excluyentes unas de otras, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso en particular. En este marco se inserta la noción de la reparación integral

160. Para hacer efectivo el derecho de las víctimas a obtener reparación deben tomarse en cuenta las reglas previstas por los instrumentos internacionales que establecen varios principios fundamentales tales como que la reparación debe ser suficiente, efectiva, rápida y proporcional a la gravedad de las violaciones y a la

¹²¹ *Principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder, A.1 y A.2.*

¹²² *OFICINA EN COLOMBIA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS, La Organización de las Naciones Unidas y los derechos de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, Bogotá, 26 de septiembre de 2002.*

¹²³ *Corte I.D.H., Caso Juan Humberto Sánchez, sentencia de 7 de junio de 2003, (p. 147).*

¹²⁴ *Ver por ejemplo, la comunicación 107/1981, Elena Quinteros contra Uruguay, del Comité de Derechos Humanos, (p. 14-16)*

entidad del daño sufrido y cuando el Estado ha resarcido a la víctima por una violación, quien la haya cometido deberá resarcir al Estado, además de que el Estado debe garantizar la ejecución de las sentencias nacionales e internacionales que impongan reparaciones.

161. En desarrollo de estos principios es importante determinar los mecanismos concretos que permitan que efectivamente las víctimas puedan recibir la reparación a la cual tienen derecho. Independientemente de la obligación de reparar por parte de los victimarios, el Estado debe respetar su obligación de reparar cuando sus funcionarios sean responsables por acción o por omisión en los hechos, o cuando el responsable de éstos no cumpla con su obligación de reparar.

III.2. - El derecho a la reparación

162. El deber de reparación a las víctimas de violaciones de derechos humanos es un principio consuetudinario que, recogido en diversos tratados internacionales, se ha ido desarrollando doctrinaria y jurisprudencialmente con los elementos fundamentales de esa noción.

163. El artículo 63.1 de la Convención dispone que:

Quando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada

164. La Corte IDH sostuvo que el artículo 63.1 de la Convención Americana que dispone la obligación de reparar cuando se produjo una violación, constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los pilares fundamentales del actual derecho de gentes tal como lo ha reconocido esta Corte y la jurisprudencia de otros tribunales¹²⁵.

¹²⁵ Corte IDH, Caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, párr. 43; Caso El Amparo, reparaciones, sentencia del 14 de septiembre de 1996, párr. 14. Ver también Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización compensatoria sentencia de 21 de julio de 1989, párr. 25; Caso Godínez Cruz, Indemnización compensatoria, sentencia de 21 de julio de 1989, párr. 23.

165. El texto del referido artículo establece el alcance de la obligación de reparar estableciendo tres extremos a cargo del Estado: primero, que "se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados"; Segundo, que "se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos." y tercero, todo esto, además del "pago de una justa indemnización.¹²⁶, por cuanto toda violación de una obligación internacional que haya producido un daño comporta el deber de repararlo adecuadamente¹²⁷

166. En materia de derechos humanos, la Corte ha desarrollado los elementos que debe contener la reparación, de manera más o menos exhaustiva, así surge de su jurisprudencia en materia de reparaciones que ha reconocido el deber de reparar adecuadamente a la víctima y a sus familiares, ordenando el pago de una indemnización por daño emergente, lucro cesante, y reparación del daño moral, incluyendo el pago de indemnización y la adopción de medidas de rehabilitación del buen nombre de las víctimas, y que se investiguen los hechos y se provea el castigo de quienes sean encontrados culpables. Según esta interpretación, la realización de la justicia es parte integrante de la reparación

167. En relación al alcance de la indemnización, la Corte ha dispuesto que "... La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional consiste en la plena restitución (*restitutio in integrum*), lo que incluye el restablecimiento de la situación anterior, de no ser aquello posible la reparación de las consecuencias

¹²⁶ *La Corte Interamericana ha desarrollado el contenido de estos tres elementos, bajo el concepto de restitutio in integrum. Especialmente por el tipo de casos en que ha intervenido (desapariciones y ejecuciones extrajudiciales) ha analizado extensamente la reparación y el contenido de la justa indemnización. Velásquez Rodríguez y Godínez Cruz. Indemnización compensatoria e interpretación de la Sentencia de Indemnización Compensatoria, Sentencias de 21 de Julio de 1989 y 17 de agosto de 1990 respectivamente, caso Aloeboetoe y otros. Reparaciones, sentencia de 10 de septiembre de 1993. caso El Amparo. Reparaciones, sentencia de 14 de septiembre de 1996. caso Neira Alegria y otros. Reparaciones. Sentencia de 19 de septiembre de 1996; caso Caballero Delgado, Reparaciones. Sentencia de 29 de enero de 1997.*

¹²⁷ *Corte I.D.H., Caso Baldeón García, Sentencia de 6 de abril de 2006, párr. 174; Caso Acevedo Jaramillo y otros. Sentencia de 7 de febrero de 2006, párr. 294 y Caso Comunidad indígena Sawhoyamaya, Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 195.*

que la infracción produjo entre ellas el pago de una indemnización como compensación por los daños patrimoniales y extramatrimoniales, incluyendo el daño moral ...".¹²⁸

168. El derecho a obtener reparación es el que toda persona tiene a recibir, en el caso de haber sufrido un daño injusto, agravio, resarcimiento y satisfacción.

^{169.} En ejercicio del derecho a obtener reparación toda persona que ha sufrido un daño debe lograr la *restitutio in integrum*, la indemnización o reparación por equivalencia en dinero, y - La satisfacción o reparación moral, éste derecho a obtener reparación es de carácter integral, pues deberá abarcar todos los daños y perjuicios sufridos por la víctima, debiendo comprender medidas individuales de reparación relativas al derecho de restitución, indemnización y rehabilitación, medidas de satisfacción de alcance general.

170. Toda víctima debe tener posibilidad de ejercer, en la vía penal, civil, administrativa o disciplinaria, "un recurso accesible, rápido y eficaz" en solicitud de reparación. Al ejercer dicho recurso deberá beneficiarse de una protección del Estado contra actos de intimidación o de represalia, debiendo el Estado adoptar medidas adecuadas para impedir la repetición de los hechos.

III.3. Medidas de Reparación

171. Entonces como corolario de las obligaciones asumidas por el Estado, encontramos que la reparación es el último compromiso. Esto es, el Estado asume que si viola los derechos que se comprometió a proteger, debe realizar aquellos actos que borren las consecuencias del acto u omisión ilícitos. La reparación de los daños también tiene aspectos de una obligación de garantía en cuanto funciona como un mecanismo de prevención.

¹²⁸ Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso "Velásquez Rodríguez", indemnización compensatoria, sentencia de 21 de julio de 1989, párr. 26; Caso "Godínez Cruz", indemnización compensatoria, sentencia de 21 de julio de 1989; Caso de los "19 Comerciantes", sentencia de 5 de julio de 2004, párr. 221; Caso Baldeón García, Sentencia de 6 de abril de 2006, párr. 176; Caso Comunidad indígena Sawhoyamaya, Sentencia de 29 de marzo de 2006, párr. 197, y Caso Acevedo Jaramillo y otros, Sentencia de 7 de febrero de 2006, párr. 296.

172. Su objeto consiste en adoptar medidas de restitución, es decir restablecer el status quo anterior de que la violación ocurra o en el caso de no ser posible reparar el daño de otro modo que -de buena fe y conforme a los criterios de razonabilidad- sustituya a la restitución en especie, a través de la indemnización, rehabilitación, satisfacción y medidas de no repetición.

173. Con arreglo a lo establecido por los Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, las formas no excluyentes de reparación, individual o colectiva, señaladas son la restitución; la rehabilitación, la indemnización y las medidas de satisfacción y las garantías de no repetición.

III. 3. A. Medidas de Compensación

174. La jurisprudencia de la Corte claramente establece los criterios que se deben observar para proceder a otorgar una justa y equitativa indemnización con la finalidad de compensar económicamente a la víctima o sus familiares por los daños sufridos por la violación a sus derechos humanos, el monto de las mismas, dependerá del daño ocasionado en los planos tanto material como inmaterial. En todo caso, las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus familiares¹²⁹.

Daños materiales.

175. La Corte sostuvo que siempre debe darse la "restitutio in integrum", y solo si aquello no fuera posible resulta necesario buscar formas sustitutivas de reparación a favor de la víctima, los familiares y dependientes de las víctimas, mediante una justa compensación pecuniaria, indemnización que primeramente se refiere a los perjuicios sufridos que comprenden tanto el daño material como el moral,¹³⁰ a la que

¹²⁹ Corte I.D.H., *Caso Cantoral Benavides. reparaciones, sentencia de 3 de diciembre de 2001, párr. 42; Caso Cesti Hurtado. reparaciones, sentencia de 31 de mayo de 2001, párr. 36 y Caso de los "Niños de la Calle". reparaciones, sentencia de 26 de mayo de 2001, párr. 63.*

¹³⁰ Corte I.D.H., *Caso Aloeboetoe y otros; reparaciones, sentencia del 10 de septiembre de 1993, párrs. 47 y 49; Caso El Amparo, reparaciones, sentencia de 14 de septiembre de 1996, párr. 16.*

debe agregarse medidas de carácter positivo que el Estado debe adoptar para asegurar que hechos lesivos como los del presente caso no se repitan¹³¹, incorporando la Corte como parte de la indemnización obligaciones de hacer, teniendo en cuenta las características particulares del caso¹³².

176. La indemnización se refiere a la compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una violación y que fuere evaluable económicamente; y comprende tanto el lucro cesante (*lucrum cessans*) como el daño emergente (*damnum emergens*). Se concede en casos de daño físico o mental; de pérdida de oportunidades -incluyendo las relativas a la educación o al trabajo-; de daños materiales y pérdidas de ingresos -incluido el lucro cesante-; de daños a la reputación o a la dignidad; así como para los gastos de asistencia jurídica o de otros expertos, de medicinas o de servicios médicos

177. El daño emergente consiste en la afectación económica derivada directa e inmediatamente de los hechos producidos por el accionar ilícito de agentes estatales, por los que la víctima o sus familiares se vieron obligados a incurrir en gastos como el tratamiento médico y psicológico o la pérdida de ingresos económicos.

178. El Lucro cesante que comprende todo lo que la víctima dejó de ganar durante todo el tiempo que permanece el daño, para lo cual se considera la perspectiva de vida que tenía la víctima, tiempo durante el cual con su trabajo hubiese podido acrecentar su patrimonio en beneficio familiar.

179. Ahora bien una vez establecido que en el presente caso, las indemnizaciones pecuniarias son formas sustitutivas de reparación, debemos dilucidar que elementos o componentes que integran el daño

¹³¹ Corte I.D.H., Caso de la "Panel Blanca" (*Paniagua Morales y otros*). reparaciones, sentencia de 25 de mayo de 2001, párr. 80; Caso Castillo Páez. reparaciones, sentencia de 27 de noviembre de 1998. párr. 52 y Caso Garrido y Baigorria. reparaciones, sentencia de 27 de agosto de 1998, párr. 41.

¹³² Así, ha ordenado reabrir una escuela y un dispensario médico en la aldea de Gubaja para que los menores de edad beneficiarios de una indemnización puedan estudiar. Ver Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso "Aloeboetoe y otros"; reparaciones, sentencia del 10 de septiembre de 1993. En: "Informe Anual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", pág. 86. Secretaría General de la OEA, Washington DC, Estados Unidos, 1994.

material e inmaterial, respecto a lo que la Corte dijo que se debe tener en cuenta un sistema de equilibrio que incluya la edad de la víctima, la expectativa de vida de la misma, sus ingresos reales y potenciales y el número de sus dependientes y sucesores y cuando no hubiere datos sobre sus ingresos reales se tomará en cuenta el salario mínimo vital vigente en el país,¹³³ pudiendo además basar el cálculo de la indemnización tomando como salario base un monto no menor al costo de la canasta alimentaria básica desde que ocurrieron los hechos hasta la presente.¹³⁴

180. Además es necesario referirnos al daño patrimonial familiar, considerando que toda violación produce un impacto negativo en la familia de las víctimas, lo cual las obliga a cambiar su modo de vida, en ese sentido la Corte ha dicho que los familiares de la víctima perdieron sus trabajos o la posibilidad de realizar sus actividades cotidianas debido al cambio de sus circunstancias personales, además incurrieron en gastos económicos para atender los diferentes padecimientos ocasionados por esos hechos.¹³⁵

181. De lo expuesto y tomando en cuenta la jurisprudencia del H. Tribunal, por el momento consideramos que por concepto de indemnización material debe otorgarse un valor de 30.000 dólares a la conviviente y a la madre, 20.000 dólares a cada uno de los hijos y 10.000 dólares a cada uno de los hermanos y al primo que incluso perdió el trabajo por dedicarse a buscar a Marco Palma.

Daños inmateriales de los familiares.

182. La Corte ha dicho que el daño inmaterial puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las víctimas directas y a sus allegados, y el menoscabo de valores muy significativos para las personas, como las alteraciones, de carácter no pecuniario, en las

¹³³ Corte I.D.H., *Caso Neira Alegria, reparaciones, sentencia de 19 de septiembre de 1996, párr. 49*

¹³⁴ Corte I.D.H., *Caso El Amparo, reparaciones, sentencia de 14 de septiembre de 1996,*

¹³⁵ Corte I.D.H., *Caso Bulacio, reparaciones, sentencia de 18 de septiembre de 2003, párr. 88.*

condiciones de existencia de la víctima o su familia,¹³⁶ siendo solo objeto de compensación con fines de reparación integral a las víctimas a través de dos medios, en primer lugar mediante una cantidad de dinero que el tribunal determine en aplicación razonable del arbitrio judicial y en segundo lugar mediante la ejecución de obras de repercusión pública que tenga como efecto la recuperación de la memoria, de disculpas públicas a los deudos y reprobación oficial a las violaciones a los derechos humanos, con el compromiso de que hechos similares no vuelvan a ocurrir.¹³⁷

183. Respecto del daño moral dijo que, "resulta evidente pues es propio de la naturaleza humana que toda persona sometida a las agresiones y vejámenes mencionados experimente un sufrimiento moral. La Corte estima que no se requieren pruebas para llegar a esta conclusión..."¹³⁸.

184. Si bien es verdad que en muchos casos la sentencia condenatoria en contra de un Estado per se constituye una reparación del daño moral, sin embargo, la Corte ha considerado que aún cuando una sentencia condenatoria, puede constituir en sí misma una forma de reparación y satisfacción moral, en el presente caso, ésta no sería suficiente dada la específica gravedad de la violación al derecho a la vida y al sufrimiento moral causado a las víctimas y sus familias, las cuales deben ser indemnizadas conforme a la equidad¹³⁹.

185. Tomando en cuenta que la H. Corte dijo que se puede declarar la violación del derecho a la integridad psíquica y moral de familiares directos de víctimas de ciertas violaciones de derechos humanos aplicando una presunción iuris tantum respecto de madres y padres, hijas e hijos, esposos y esposas, compañeros y compañeras permanentes

¹³⁶ Corte I.D.H., *Caso Juan Humberto Sánchez*, Sentencia de 7 de junio de 2003, párr. 168; *Caso del Caracazo*, Reparaciones, Sentencia de 29 de agosto de 2002, párr. 94; y *Caso Trujillo Oroza*, Reparaciones, Sentencia de 27 de febrero de 2002, párr. 77.

¹³⁷ Corte I.D.H., *Caso Masacre Plan de Sánchez*, sentencia de 19 de noviembre de 2004, párr. 80.

¹³⁸ Corte IDH, *Caso Aloeboetoe y otros*, Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, párr. 55.

¹³⁹ Corte I.D.H., *Caso Neira Alegria*, reparaciones, sentencia de 19 de septiembre de 1996, párr. 56.

(en adelante “familiares directos”), siempre que ello responda a las circunstancias particulares en el caso, y respecto de aquellas personas [que no son familiares directos] la Corte evaluará, por ejemplo, si existe un vínculo particularmente estrecho entre éstos y las víctimas del caso que permita a la Corte declarar la violación del derecho a la integridad personal. El Tribunal también podrá evaluar si las presuntas víctimas se han involucrado en la búsqueda de justicia en el caso concreto, o si han padecido un sufrimiento propio como producto de los hechos del caso o a causa de las posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades estatales frente a los hechos¹⁴⁰

186. En ese sentido consideramos que la H. Corte debe en sentencia ordenar el pago de indemnizaciones por daño moral a favor de los hijos del primer matrimonio de Marco Palma, que responden a los nombres de; Geoconda María Palma Figueroa quien al ser la hija mayor sufrió mucho ante la pérdida de su padre y luego sufrió al ver que su hermano Marcos Jimmy Palma Figueroa comenzó a ser perseguido debido a que exigía se sancione a los autores materiales, debiendo por ello incluso huir de su casa y posteriormente lo asesinaron.

187. Se indemnice por daño moral a Lidia Guadalupe Bravo Bravo, con quien convivía al momento de los hechos y con la cual procreo 5 hijos que responden a los nombres de; Luis Miguel Palma Bravo que estuvo presente durante el secuestro; Rosalía Mariuxi Palma Bravo (que presentó acusación en el juicio penal- al momento fallecida en el 2005 y dejó un niño en la horfandad pues era madre soltera), María Lilibeth Palma Bravo, Wider Ramón Palma Bravo y William Marco Palma Bravo, hijos que incluso padecieron penurias económicas debido a que su madre gastó el dinero en la búsqueda de su padre, por lo cual corrieron riesgo incluso de dejar de estudiar..

188. Mientras convivía con Lidia Bravo, en otras mujeres tuvo dos hijos que responden a los nombres de Monserrate Lili Palma Cedeño; Robinson Marcos Palma Mendoza. y Nelson Palma Mendoza, los cuales a raíz de la muerte de Marco Palma sufrieron penurias económicas, pues era él quien en forma responsable se preocupaba de su alimentación, vestido, vivienda y educación..

189. La Señora Perfelita Matilde Mendoza Aguayo, madre de Marco Palma, que sufrió la pérdida de su hijo y hasta el final en calidad de acusadora particular buscó que los tribunales internos hagan justicia,

¹⁴⁰ Corte IDH, Caso Valle Jaramillo y otros, párr. 119

quien debido a su avanzado estado de edad dependía económicamente de la ayuda que Marco Palma le brindaba para alimentación y salud.

190. Son hermanos de Marco Palma: Víctor Laudino Palma Mendoza; Manuel Vicente Palma Mendoza; Aura Indelira Palma Mendoza; Laurentina Leonor Palma Mendoza; Julio César Palma Mendoza, es menester señalar al H. tribunal Interamericano que al momento Carlos Alberto Palma Mendoza señalado por la I. Comisión esta fallecido, los cuales sufrieron la forma en que su hermano primero fue secuestrado y luego ha sido asesinado, pues la familia era muy unida y todos los fines de semana se encontraban en la casa de Marco Palma para departir juntos.

191. Solicitamos a la H. Corte que también se considere otorgar indemnización por daño moral a Pablo Antonio Palma Pico, que en su calidad de primo de Marco Palma Mendoza, se apersono de la búsqueda y acompañó a todo lado a Lidia Bravo en requerimiento a las autoridades de que entreguen con vida a su primo cuando creían que las fuerza armadas lo tenían detenido y posteriormente apoyo en el seguimiento del proceso judicial en busca de justicia, situación que incluso le acarreo problemas familiares pues llegó a perder su trabajo.

192. De acuerdo a las evaluaciones psiquiátricas efectuadas, todos los integrantes del núcleo familiar presentan cuadros de afectación emocional por lo vivido¹⁴¹

193. En razón del daño moral causado a la familia, por el sufrimiento al cual innecesariamente se vieron abocados, consideramos que la H. Corte en equidad debe fijar un monto de 60.000 dólares para Lidia Bravo Bravo con quien Marco convivía al momento de los hechos,, 40.000 dólares para cada uno de los hijos, 40.000 dólares para la madre de Marco Palma, 30.000 dólares para el primo que dedicó su tiempo a la búsqueda de Marco Palma y 20.000 dólares para cada uno de los hermanos.

Medidas de satisfacción y garantías de no repetición.

194. Entre la satisfacción y las garantías de no repetición se incluyen varias medidas que apuntan a una reparación simbólica y otras orientadas a la prevención de violaciones, construyendo las condiciones para evitar la repetición de las mismas.

¹⁴¹ ANEXO 57. - Informe Psicológico que señala el daño sufrido por los integrantes de la familia e incluso recomienda que reciban un tratamiento y evaluación especializada a fin de superar los traumas sufridos.

195. La garantía de no repetición está identificada con la adopción de las medidas necesarias para evitar que las víctimas sean afectadas con la comisión de nuevos crímenes del mismo género. De esta forma de reparación hacen parte medidas para prevenir la perpetración de conductas criminosas mediante diversas acciones.

196. En este sentido, se considera adecuado que la Corte ordene al Estado que cree una política pública que permita que en casos similares se movilice en forma urgente todo el aparato del Estado a fin de evitar violaciones al derecho a la vida, especialmente aplicando el mecanismo de búsqueda urgente consagrado en el Art. 90 de la actual Constitución, debe el Estado realizar un acto de disculpas públicas a la familia, reparar los daños causados a los familiares, tanto en el aspecto material como mora y realizar acciones para evitar que esto se repita

III.3.B Los beneficiarios de las medidas de reparación

197. Los beneficiarios de las medidas de reparación que adopte la Corte son aquellas directamente lesionadas por la violación efectuada por el Estado, al respecto la Corte ha dicho que el término familiares de la víctima debe entenderse como un concepto amplio que abarca a todas aquellas personas vinculadas con un parentesco cercano.¹⁴² En el presente todos los hijos dependían económicamente de su padre Marco Palma Mendoza, al igual que su conviviente, quienes sufrieron directamente primero por su secuestro y posterior muerte y la negativa a otorgar justicia, al igual que sufrieron la madre de Marco Palma y sus hermanos, al igual que un primo que dedico su tiempo y esfuerzo a su búsqueda, debido a que eran una familia muy unida al igual que lo son ahora, en que continúan viéndose seguido y se preocupan los unos de los otros, por lo cual los beneficiarios son:

Lidia Guadalupe Bravo Bravo (Conviviente);
Luis Miguel Palma Bravo (hijo)
María Lilibeth Palma Bravo (hija),

¹⁴² Corte IDH, *Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, Sentencia de 10 de septiembre de 1993, párr. 71; Caso Garrido y Baigorria. reparaciones, sentencia de 27 de agosto de 1998, párr. 52 y Caso Loayza Tamayo, reparaciones, sentencia de 27 de noviembre de 1998, párr. 92.*

Wider Ramón Palma Bravo (hijo)
 William Marco Palma Bravo (hijo)
 Geoconda María Palma Figueroa (Hija)
 Monserrate Lili Palma Cedeño (Hija)
 Robinson Marcos Palma Mendoza (hijo)
 Nelson Palma Mendoza (hijo)
 Perfelita Matilde Mendoza Aguayo, (madre)
 Víctor Laudino Palma Mendoza; (hermano)
 Manuel Vicente Palma Mendoza; (hermano)
 Aura Indelira Palma Mendoza; (hermano)
 Laurentina Leonor Palma Mendoza; (hermano)
 Julio César Palma Mendoza, (hermano)
 Pablo Antonio Palma Pico (Primo)

Costas y gastos

198. La jurisprudencia constante de la I. Corte ha señalado que las costas y gastos son parte del derecho a la reparación consagrado en el artículo 63.1 de la Convención, puesto que la actividad desplegada por la parte interesada para acceder a la justicia implica gastos y compromisos económicos que deben ser compensados,¹⁴³ lo cual comprende las erogaciones necesarias para acceder a los organismos de protección internacional establecidos en la Convención Americana.

199. La señora Lidia Bravo Bravo tuvo la necesidad de contratar abogado para que le ayude en la búsqueda de Marco Palma, para lo cual incluso incurrió en gastos de movilización y viáticos al abogado a diversas ciudades como Quito y Guayaquil, luego la familia contrató abogado para que los represente en el proceso penal instaurado en contra de los responsables¹⁴⁴, por lo cual consideramos que debe reconocerse en equidad el valor de 10.000 dólares, aunque el monto exacto del rubro incurrido en honorarios profesionales podremos cuantificarlo de mejor manera más adelante.

¹⁴³ Corte I.D.H., *Caso Masacre Plan de Sánchez*, sentencia de 19 de noviembre de 2004, párr. 115.

¹⁴⁴ ANEXO 58. - *Informe de Inteligencia de la policía que entre otras cosas señala que Lidia Bravo Bravo pagó a su abogado por honorarios a fin de que lo ayude a sacarlo de las instalaciones militares e incurrió en gastos de movilización y viáticos del mismo profesional hacia otras ciudades, así como los gastos de movilización de ella para buscar a Marco Palma.*

200. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), tiene como misión la defensa gratuita de las víctimas o sus familiares ante las autoridades internas o ante el sistema interamericano, sin embargo como peticionario original ha incurrido en gastos para enfrentar el trámite del caso ante la Comisión Interamericana, como costos de envío de documentos y transmisión por fax de los mismos, llamadas telefónicas, destinar a un abogado del personal de la CEDHU para que apoye las acciones a nivel interno en la búsqueda de información y realice la defensa del caso a nivel internacional durante la etapa ante la I. Comisión Interamericana y durante el trámite del expediente que se adelanta ante la H. Corte Interamericana en que necesariamente incurrirá en gastos de envío de documentos por courier y transmisión por fax de los mismos, llamadas telefónicas, costos de pasajes de avión y hospedaje para desplazarse a la sede de la Corte o al lugar en que se efectúen las audiencias a las que convoque la Corte, y en fin cuanto gasto se produzca en el presente caso.

201. Por ello consideramos que sería razonable que la I. Corte ordene que en concepto de costas y gastos se pague a la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos la cantidad de 15.000 dólares, sin embargo considerando que al momento se hace difícil calcular los gastos en que se incurrirá en el futuro por el trámite del caso ante la H. Corte, solicitamos que posteriormente se nos permita la presentación de pruebas y un detalle más acertado de los gastos en que se ha incurrido.

IV. PRUEBAS

202. La Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, hace suyas todas las pruebas presentadas y solicitadas por la Comisión.

203. Adicionalmente solicitamos que la I. Corte acepte como prueba los documentos que a continuación detallamos y nos autorice a que durante la audiencia que convoque en el presente caso presentemos prueba testimonial.

1. Prueba Testimonial

204. Se solicita a la H. Corte que durante la audiencia que convoque en el presente caso se reciba el testimonio de Lidia Guadalupe Bravo Bravo y Luis Miguel Palma Bravo (hijo) y se nos permita presentar testimonios ante fedatario público de las siguientes personas: Pablo Antonio Palma Pico; Nelson Palma Mendoza; Geoconda María Palma

Figueroa; Víctor Laudino Palma Mendoza; Monserrate Lili Palma Cedeño y Nelson Palma Mendoza.

2.- Prueba documental

205. Agregamos en calidad de prueba documental los siguientes anexos, mismos que solicitamos a la H. Corte los agregue al expediente respectivo para los fines establecidos en el Reglamento de la Corte.

ANEXO 1.- Entrevista a Manuel Armijos. Informe Policial No. 97-218-OID-MM-PREL de 23 de mayo de 1997, firmado por Lino Caicedo, investigador de la Policía Nacional, dirigido al Sub-Jefe de la Oficina de Investigación del Delito de la Policía de Manta.

ANEXO 2.- Denuncia presentada por Lidia Guadalupe Bravo Bravo, compañera del señor Marco Palma Mendoza, ante el Juez de lo Penal de Manabí el 17 de mayo de 1997.

ANEXO 3.- Declaración de Lenin Ordóñez en Informe Policial No. 2000-128-PJ-M-COMPL de 26 de febrero de 2000, firmado por el Cabo primero de policía Aladino Zambrano, dirigido al Jefe de la Policía Judicial de Manta; ver además declaración rendida en la Policía Judicial de Quito en Informe Policial de 4 de marzo de 2000, firmado por el Subteniente Marco Zuñiga, dirigido al Jefe Provincial de la Policía Judicial de Pichincha.

ANEXO 4.- Testimonio Indagatorio de Freddy Simon Contreras Luna, rendida ante el Juez XI Penal de Manabí el 27 de marzo de 2000; testimonio de Vicente Aviles rendida ante el mismo juez el 4 de abril de 2011 y certificación conferida por el Jefe del Departamento Administrativo de la Dirección de Personal de la FAE.

ANEXO 5.- Testimonio instructivo de Luis Miguel Palma Bravo rendido ante el Juzgado Décimo Primero de lo Penal de Manabí del 5 de abril de 2000.

ANEXO 6.- Oficio N° 640-97 de 17 de mayo de 1997, suscrito por el Juez XI de lo Penal de Manabí y dirigido al Jefe de la Oficina de Investigación del Delito de Manta.

ANEXO 7.- Comunicación del 22 de mayo de 1997, firmada por el Alcalde de Manta, dentro del Recurso de Hábeas Corpus presentado por Carlos Alberto Palma Mendoza, dirigido a la Sub. Jefatura de la O. I. D. de Manta.

ANEXO 8.- Recurso de Habeas Corpus presentado en la Alcaldía de Quito a favor de Marco Palma.

ANEXO 9.- Auto cabeza de Proceso dictado por el Juzgado XI de lo Penal de Manabí, instruyendo el sumario de ley.

ANEXO 10.- Oficio ESMAAR-SED-062-0 de 8 de agosto de 1997, dirigido a la Hna. Elsie Monge, Presidenta de CEDHU y firmado por el Jefe del Estado Mayor de la Armada.

ANEXO 11.- Oficio N° 0347 del Ministerio de Gobierno de 3 de octubre de 1997, dirigido a la Hermana Elsie Monge, Presidenta de la CEDHU.

Anexo 12.- Parte Elevado el 9 de junio de 1998, al Sr. Jefe de la O.I.D. de Manta por el Sargento segundo de Policía, Lino Caicedo Bonifacio.

ANEXO 13.- Informe Policial 98-190-OID-MM, suscrito por el Sargento segundo Lino Caicedo Bonifacio, dirigido al Jefe de la IID-Manta el 1 de septiembre de 1998.

ANEXO 14.- Oficio No. 034-CEDHU/99 de 25 de enero de 1999, firmado por Elsie Monge, presidenta de la CEDHU, dirigido al Ministro de Defensa Nacional.

ANEXO 15.- Oficio No. 990281-MJ-2-b de 17 de marzo de 1999, del Ministerio de Defensa Nacional, dirigido a la Hna. Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la CEDHU.

ANEXO 16.- Escrito de Lidia Bravo Bravo, dirigida al Juez XI Penal de Manabí el 24 de febrero del 2000, foja 19 del proceso interno; Informe Policial No. 2000-116-PJ-M de 21 de febrero de 2000, firmado por Aladino Acosta, investigador de la Policía Nacional, dirigido al Jefe de la Policía Judicial de Manta.

ANEXO 17.- Informe Suplementario de la Policía Nacional de Ecuador No. 2000-150-PJ-M-COMPL de 3 de marzo de 2000, fojas 62 a 76 del proceso penal interno.

ANEXO 18.- Recorte de prensa de diario El Universo de 23 de mayo de 1997

ANEXO 19 Providencia del Juez XI Penal de Manabí ordenando prisión preventiva de los acusados y más diligencias a efectuar la policía.

ANEXO 20.- Acta de reconocimiento y autopsia de cadáver, realizado en Manta y firmado por el Juez XI de lo Penal de Manabí y los peritos Dr. Camilo B. Andrade Carrillo y Dr. Edwin G. Díaz Loor, perito, fojas 50 del proceso penal interno.

ANEXO 21.- Testimonio indagatorio del sindicado Lenin Oswaldo Ordóñez Ortiz, rendido ante el Juez XI de lo Penal de Manabí, en Manta el 9 de marzo de 2000, fojas 86 a 90 del proceso penal interno, declaración en que reitera lo dicho ante los agentes de policía.

ANEXO 22.- Acta de reconstrucción de los hechos, realizada en Manta, el 13 de marzo de 2000 con la participación del Juez XI de lo Penal de Manabí, el Secretario del Juzgado y dos peritos, fojas 93 proceso interno.

ANEXO 23.- Acusación particular interpuesta por Rosalía Palma Bravo en contra de los acusados y solicita al juez continúe con las investigaciones hasta que se llegue a la sanción de los responsables, fojas 109 a 115 del proceso penal interno.

ANEXO 24.- Escrito de acusación particular interpuesta por Rosa Rufina Parrales, fojas 175 a 177 del proceso penal interno.

ANEXO 25.- Providencia de 18 de marzo de 2000, emitida por el Juzgado XI Penal de Manabí, fojas 189 a 190 del proceso penal interno.

ANEXO 26.- Acta de reconocimiento del lugar de los hechos, fojas 255 del proceso penal interno.

ANEXO 27.- Parte Informativo elevado al Jefe Provincial de la Policía Judicial del Guayas, firmado por el Capitán de Policía Marcelo González, fojas 292 del proceso penal.

ANEXO 28.- Testimonio instructivo rendido por Mariuxi Palma Bravo ante el juez XI de lo Penal de Manabí, fojas 279 y 280 del proceso penal.

ANEXO 29.- Solicitud a la judicatura que dicte medida cautelar de prisión preventiva contra los autores materiales.

ANEXO 30.- Providencia del 24 de marzo de 2000 negando la petición de ordenarse la detención de los autores materiales.

ANEXO 31.- Escrito presentado ante el Juez XI Penal de Manabí por Nelson José Palma Mendoza el 30 de marzo de 2000, señalando domicilio de su abogado para recibir notificaciones.

ANEXO 32.- Escrito de acusación particular presentado ante el Juez XI Penal de Manabí por Geoconda Palma Figueroa, Marco Palma Figueroa, Monserrate Palma Cedeño, Nelson José Palma Mendoza, y Vicente Palma Mendoza en representación de Robinson Palma Mendoza, en calidad de hijos de Marco Bienvenido Palma Mendoza el 17 de abril de 2000, señalando domicilio de su abogado para recibir notificaciones.

ANEXO 33.- Testimonio instructivo rendido el 2 de mayo de 2000 en el Juzgado XI Penal de Manabí.

ANEXO 34.- Testimonio instructivo rendido el 2 de mayo de 2000 en el Juzgado XI Penal de Manabí.

ANEXO 35.- Escrito dirigido por la señora Rosa Rufina Parrales Cedeño al Juez XI de lo Penal de Manabí, en el proceso penal 319-97 por el delito contra las personas en contra de Lenin Ordóñez.

ANEXO 36.- Notaría Pública Cuarta del Canton Manta, Testimonio de Escritura autorizado por el Notario Ab. Simón Zambrano Vines.

ANEXO 37.- Escrito dirigido al Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí por Rosalia Mariuxi Palma Bravo, dentro del proceso penal No. 319-97 en contra del Dr. Medardo Cevallos Balda, Ing. Medardo Cevallos Gómez Piñán, Lenin Ordóñez Ortiz.

ANEXO 38.- Notaría Pública Cuarta del Canton Manta, Testimonio de Escritura autorizado por el Notario Ab. Simón Zambrano Vines.

ANEXO 39.- Escrito de Perfelita Matilde Mendoza Aguayo, dirigido al Señor Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí, dentro de la causa instaurada para investigar lo sucedido con Marco Palma.

ANEXO 40.- Resolución del 9 de mayo de 2000, del Juzgado XI de lo Penal de Manabí, con asiento en la Ciudad de Manta.

ANEXO 41.- Ministerio Fiscal General, Causa Penal No. 319-97, firmado por el Abogado George Moreira Mendoza, Fiscal XI Penal de Manabí.

ANEXO 42.- Escrito dirigido por la señora Rosa Rufina Parrales Cedeño al Juez XI de lo Penal de Manabí.

ANEXO 43.- Providencia de mayo 23 de 2000 suscrita por el Juez XI de lo Penal de Manabí. Proceso 319-97

ANEXO 44.- Escrito dirigido al Señor Juez Décimo Primero de lo Penal de Manabí.

ANEXO 45.- Resolución del Presidente de la Corte Superior de Justicia de Manabí.

ANEXO 46.- Diligencia de declaración instructiva.

ANEXO 47.- Escrito de formalización de la acusación particular presentado al Juzgado XI Penal de Manabí.

ANEXO 48.- Dictamen fiscal parcialmente acusatorio emitido por el abogado Jorge Moreira, Fiscal XI de lo Penal de Manabí, de fecha 26 de diciembre de 2000.

ANEXO 49.- Auto de Apertura al Plenario, Juzgado XI Penal de Manabí, de enero de 2001

ANEXO 50.- Resolución de Apelación emitida por la Cuarta Sala de la Corte Superior de Justicia de Manabí.

ANEXO 51.- Sentencia del Tribunal Penal de Manabí, Manta 19 de marzo de 2001, dentro de la Causa Penal N° 18-2001.

ANEXO 52.- Sentencia de Casación, Segunda Sala Penal de la Corte Suprema

ANEXO 53.- Auto de sobreseimiento definitivo emitido por el Juzgado 11 Penal de Manabí

ANEXO 54.- Auto que confirma el sobreseimiento definitivo emitido por la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Portoviejo.

ANEXO 55.- Providencia del 16 de abril de 2007 emitida por el Juzgado XI Penal de Manabí.

ANEXO 56.- Notas de solidaridad al embajador frente a las acusaciones vertidas en su contra.

ANEXO 57.- Informe Psicológico que señala el daño sufrido por los familiares de Marco Palma Mendoza e incluso recomienda que ellos reciban un tratamiento y evaluación especializada a fin de superar los traumas sufridos.

ANEXO 58.- Informe de Inteligencia de la policía que entre otras cosas señala que Lidia Bravo Bravo pagó a su abogado por honorarios a fin de que lo ayude a sacarlo de las instalaciones militares e incurrió en gastos de movilización y viáticos del mismo profesional hacia otras ciudades, así como los gastos de movilización de ella para buscar a Marco Palma y declaración de un testigo que informa también sobre gastos incurridos.

V. REPRESENTACION

206. 134. Conforme a lo dispuesto en el Reglamento de la Corte, los familiares de Marco Bienvenido Palma Mendoza, han designado al Dr. César Duque, asesor jurídico de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos para que los represente ante la H. Corte en el presente caso conforme el poder que oportunamente al Tribunal Interamericano.

VI. CONCLUSIONES

207. 135. Por todo lo expuesto, solicitamos a la H. Corte Interamericana que concluya y declare la responsabilidad internacional en que ha incurrido el Estado ecuatoriano por la violación de sus obligaciones convencionales establecida en los artículos 5, 8 y 25 en relación con el Art. 4 de la Convención Americana y por la violación del Art. 1.1 del mismo instrumento internacional, al no haber protegido el derecho a la vida de Marco Palma debido a la falta de intervención oportuna de las agencias del Estado y la falta de recursos adecuados para prevenir violaciones al derecho a la vida e investigar enjuiciar y sancionar a todos los responsables, incluyendo tanto a autores

materiales, como a los autores intelectuales, cómplices y encubridores de las violaciones a los derechos humanos.

VII. PETITORIO

208. 136. En razón de lo anterior solicitamos a la H. Corte Interamericana que en sentencia ordene al Estado ecuatoriano a realizar lo siguiente:

1. Realice un acto público de reprobación oficial por la falta de diligencia y lentitud judicial en el presente caso.

2. Que el Estado efectúe actos de disculpa pública a la familia, de reproche a los actores materiales e intelectuales de los hechos ocurridos y de publicidad a la decisión que en el presente procedimiento adopte la Corte.

3. Que en cumplimiento de sus deberes de obligación y garantía establecidos en la Convención Americana, efectúe todas las acciones que sean necesarias para que hechos similares no vuelvan a ocurrir.

4. Establezca programas de educación sobre debido proceso dirigido a jueces y fiscales a fin de que estén capacitados sobre su obligación de investigar e identificar a los responsables de acciones ilícitas de instancia pública y resolver las causas de manera independiente e imparcial dentro de un plazo razonable.

5.- Adopte las medidas que sean necesarias para reparar el daño causado a los familiares de las víctimas, lo cual incluirá los daños materiales e inmateriales.

6.- Pagar las costas y gastos que haya originado el presente caso, en su búsqueda de justicia en el ámbito interno y ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos.

De esta forma doy cumplimiento a lo dispuesto por el H. Tribunal Interamericano, para los fines consiguientes.

Atentamente,

Hna. Elsie Monge
DIRECTORA EJECUTIVA CEDHU

César Duque
ASESOR JURIDICO CEDHU